

Decrecimiento y renovadas estrategias para un territorio agotado. El caso de la provincia de Alicante

XAVIER AMAT MONTESINOS¹ ✉

Recibido: 07-11-2014 | Aceptado: 18-07-2015

Resumen

Las consecuencias del último *boom* inmobiliario han abierto el debate alrededor del crecimiento urbano en España, especialmente en áreas con una fuerte presión turística y residencial. En este trabajo se analizan algunas de las implicaciones de la crisis financiera mundial sobre la planificación urbanística municipal, centrandolo en la provincia de Alicante, uno de los ámbitos que mejor ilustran el éxito y la caída del modelo inmobiliario hispano. La unidad básica de análisis la componen las figuras de planeamiento municipal y estrategias territoriales vigentes, y su traducción en suelos urbanos inconclusos. Considerando que se trata de actuaciones durmientes a la espera de un contexto económico favorable, la situación hace pensar que la burbuja inmobiliaria no estaría estallada sino tan sólo desinflada.

El objetivo es reflexionar, con carácter propositivo, sobre las estrategias de gestión del territorio que emergen durante los últimos años a raíz de la crisis financiera e inmobiliaria, tratando de relanzar algunas cuestiones que deberían preocupar en la planificación urbanística y territorial de la provincia de Alicante, y por extensión, de otros espacios afectados por el *crash* inmobiliario.

Palabras clave: planificación urbana, crecimiento urbano, decrecimiento, gestión del suelo urbano, Alicante.

Abstract

Degrowth and renewed strategies for an exhausted territory. The case of the province of Alicante

The consequences of the last real estate boom have opened the debate about urban expansion in Spain, especially in areas with a strong tourist and residential pressure. In this article, we analyze some of the implications of the global financial crisis on the municipal urban planning, focusing the study on the province of Alicante, one of the areas that best illustrate the success and fall of Hispanic Real Estate Model. The basic unit of analysis will be the current city planning and its translation to unfinished urban landscapes. Whereas they are latent actions awaiting for a favorable economic context, suggest that the housing bubble would not burst but it would only be deflated.

The aim is to reflect, purposefully, on land management strategies that emerged in recent years as a result of financial and housing crisis, trying to relaunch some issues that should be concerned in

1. Departamento Geografía Humana. Universidad de Alicante. xavier.amat@ua.es

urban and regional planning in the province of Alicante and by extension, in other areas affected by the real state crash.

Keywords: urban planning, urban growth, degrowth, urban land management, Alicante

Résumé

Décroissance et stratégies renouvelées pour un territoire épuisé. Le cas de la Province d'Alicante

Les conséquences du dernier *boom* immobilier ont ouvert le débat sur la croissance urbaine en Espagne, en particulier dans les zones avec une forte pression touristique et résidentielle. Dans ce travail, nous analysons les implications de la crise financière sur la Province d'Alicante, un des territoires qui illustre le mieux le succès et la chute du modèle immobilier espagnol. L'unité basique d'analyse sera les figures de planification municipale en vigueur et sa traduction en sols urbains inachevés. Si l'on considère qu'il s'agit de projets paralysés dans l'attente d'un contexte économique favorable, on peut penser que la bulle immobilière n'a pas vraiment éclaté mais s'est simplement dégonflée.

L'objectif de cette étude est de réfléchir -dans une démarche volontaire et constructive- sur les stratégies de gestion du territoire qui émergent ces dernières années suite à la crise financière et immobilière, en essayant de relancer quelques questions que devraient prendre en compte les acteurs de la planification urbaine et territoriale de la province d'Alicante et, au-delà, les autres espaces affectés par le *crash* immobilier.

Mots-clés: planification urbaine, croissance urbaine, décroissance, gestion du sol urbain, Alicante.

1. Introducción

El crecimiento económico y urbano propio del ciclo inmobiliario iniciado en 1997, experimenta una formidable transformación desde mediados del año 2006, dando lugar a una nueva etapa marcada por la incertidumbre y la provisionalidad en las formas de uso del territorio y gestión del urbanismo, debido a una nueva coyuntura económica de recesión y crisis. Este periodo, caracterizado por la difusión de planes urbanísticos incompletos, proyectos en infraestructuras paralizados y grandes intervenciones en imagen urbana cuestionadas, ha visto proliferar enormes superficies de «stock edificatorio y suelo vacante» (Jiménez, 2010: 383) a la espera de nuevas posibilidades de financiación que permitan reactivar centenares de propuestas de actuación latente.

Lo cierto es que una recesión cíclica ha abierto numerosas interrogantes en clave territorial, especialmente cuando se desciende a las geografías locales de la crisis financiera. En efecto, la crisis originada en el colapso de los mercados financieros globales se ha conectado fulminantemente con los mercados inmobiliarios e hipotecarios locales (Martin, 2010), provocando la reestructuración a la baja de las dinámicas inmobiliarias, los procesos de urbanización y los medios de financiación que actuaron durante el ciclo expansivo. Así, en los últimos tiempos, la cuestión territorial y urbanística convertida en problema, plantea multitud de incógnitas sobre qué hacer con las actuaciones urbanísticas y en infraestructuras que han quedado incompletas; qué sucede con los proyectos que siguen tramitándose; o qué pasará con las numerosas propuestas que todavía condicionan el orden urbano y territorial de un amplio conjunto de espacios.

La provincia de Alicante en el contexto del litoral mediterráneo ibérico, se sitúa como uno de los ámbitos espaciales que mejor ilustran el éxito y la caída del modelo inmobiliario hispano durante los últimos tres lustros. Pese a la ralentización económica, urbanística, e incluso el declive demográfico que ya se registra con carácter general en la mayoría de municipios; el volumen de suelo residencial, número de viviendas y potencial demográfico de los planes urbanísticos paralizados, no iniciados o en tramitación, son de un alcance suficiente como para entender que determinarán las dinámicas urbanísticas municipales en el medio y largo plazo.

Considerando que se trata de actuaciones durmientes a la espera de un contexto económico favorable, hacen pensar que la burbuja inmobiliaria no estaría estallada, sino tan sólo desinflada. Una reanudación del ciclo inmobiliario podría tener unas consecuencias económicas y ecológicas mucho más agudas que las experimentadas durante el periodo expansivo 1997-2006.

La finalidad de este trabajo² es la de reflexionar, con carácter propositivo, sobre las estrategias de uso y gestión del territorio que emergen durante los últimos años a raíz de la crisis financiera e inmobiliaria, y en especial, discutir la relevancia de la recientemente aprobada Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, relanzando las cuestiones que deberían preocupar en la planificación urbanística y territorial de la provincia de Alicante y sus municipalidades en un futuro inmediato.

Sometidos durante décadas a un paradigma urbano y territorial que no ha entendido la intervención sin crecimiento (Gaja, 2012), en la actualidad se abre un nuevo escenario en el que se ralentiza la demanda de vivienda, la recaudación vía impuestos de propiedad, las transacciones inmobiliarias, los presupuestos para afrontar obra pública, la demanda de infraestructuras, así como un largo etcétera de aspectos que aluden a la gestión urbana y territorial. Con estas condiciones, tras el mayor *boom* constructor y especulativo de la historia, con una expansión de la urbanización más espacial que demográfica (Fernández, 2006) y la “devastación urbana y paisajística asociada al ciclo expansivo” (Rullan, 2012: 165), no resulta inconveniente plantear nuevos modelos que, como poco, cuestionen la viabilidad del *crecimiento a toda costa* que se desprende de las políticas urbanas y territoriales realmente existentes.

2. Metodología y fuentes

El objetivo principal de este trabajo es el de ofrecer elementos para la reflexión en torno al impacto territorial provocado por la crisis financiera, así como sus posibles alternativas enfocadas desde el paradigma emergente del decrecimiento. La metodología planteada incorpora una parte teórica, en la que se aborda el marco epistemológico y fenomenológico de la investigación; una parte descriptiva, orientada al análisis espacial de las dinámicas urbanísticas y territoriales; y una última parte reflexiva y propositiva, alrededor del problema de investigación formulado.

En este sentido, en primer lugar se ha querido encuadrar el marco teórico de la investigación a partir del recorrido bibliográfico entre algunos de los textos que ayudan a entender la perspectiva decrecentista aplicada al análisis geográfico. Aunque todavía escasa, la investigación geográfica sobre decrecimiento puede ser una opción para desvelar las claves de la crisis económica y ecológica desde una perspectiva espacial, interpretar el desigual comportamiento de los territorios

2. Este trabajo se deriva de la tesis doctoral «La resiliencia del territorio alicantino. Una interpretación desde la geografía ecocrítica», dirigida por el Dr. Vicente Gozálviz Pérez y defendida el 4 de julio de 2013.

frente a la crisis, y ayudar a orientar las actuales prácticas urbanas y territoriales hacia otros modelos de desarrollo.

En segundo lugar, se plantea un análisis fenomenológico del denominado *tsunami* urbanizador español y la crisis inmobiliaria derivada de su burbuja especulativa, descendiendo al caso concreto de la provincia de Alicante. Para comprobar las consecuencias de este fenómeno, se realiza un análisis profundo de la situación urbanística de los municipios alicantinos, tomando como referencia los parámetros de crecimiento urbano y residencial previstos en las figuras de planeamiento municipal. Esta información se ha obtenido del Sistema de Información Urbanística de la Comunidad Valenciana y la consulta directa a los documentos de planeamiento, para determinar los horizontes de crecimiento previstos en suelo urbano y vivienda. Además, se ha llevado a cabo una tarea de localización y definición de los suelos vacantes y sectores residenciales inacabados en toda la provincia, para lo que ha sido preciso un exhaustivo trabajo de reconocimiento de estos sectores sobre el propio terreno.

En tercer lugar, se ha realizado un análisis de las directrices y objetivos de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. Se trata del instrumento de ordenación territorial vigente en esta región, cuyo propósito es el potenciar los valores territoriales como factor de competitividad y diferenciación. En este trabajo se pretende discutir la capacidad de esta herramienta para enfocar los problemas de índole urbanística y territorial que presenta la Comunidad Valenciana tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, identificando algunos puntos conflictivos de la propia estrategia.

Por último, tras conocer las perspectivas de la política territorial y urbanística vigente, se lanzan algunas de las cuestiones que deberían preocupar en la planificación del territorio alicantino en un futuro inmediato, inspiradas en los valores que incorpora el paradigma emergente del decrecimiento, y que en algunos casos ya empiezan a ser canalizados a través de prácticas alternativas en el uso y gestión del territorio que al final del trabajo se identifican.

Con este planteamiento, se tratará de situar el concepto de decrecimiento en el centro del debate sobre los renovados paradigmas de producción urbanística y residencial, y de planificación estratégica del territorio. El decrecimiento, como sistema de valores que rompe con los postulados del *crecimiento a toda costa*, germina durante los últimos años aportando una nueva capacidad para entender las absurdas e insostenibles relaciones entre la expansión urbana del capitalismo y las condiciones del medio geográfico (Guaran, 2012), pero además invita a la reflexión sobre los patrones de consumo del espacio, definiendo nuevas lógicas de planificación en la ciudad y el territorio.

3. El paradigma del decrecimiento en clave geográfica

Durante la última década están apareciendo nuevas propuestas interpretativas que tratan de enfrentar los problemas ambientales y desafíos de las sociedades actuales. El paradigma del decrecimiento es una de ellas. Partiendo de la premisa de que un crecimiento económico infinito en un planeta naturalmente finito es insostenible e imposible, el decrecimiento revisa el comportamiento de las sociedades en sobre-crecimiento, proponiendo un cambio de rumbo definitivo, necesario para resolver las deudas sociales y ecológicas del planeta.

El decrecimiento es hoy fundamentalmente un eslogan político con implicaciones teóricas, “una palabra obús, que busca romper el lenguaje estereotipado de los adictos al productivismo” (Latouche, 2009: 15). Es “un cambio de actitud, un medio y no un fin” (Ridoux, 2009: 119) que lo que pretende no es un crecimiento negativo de la economía, sino sencillamente abandonar los condicionamientos fijados por el crecimiento económico como necesidad absoluta.

El decrecimiento es, por tanto, un proyecto político que consiste en la construcción de actitudes convivenciales, autónomas y ahorrativas. A nivel teórico, la palabra *acrecimiento* sería más apropiada “al indicar un abandono del culto irracional y casi religioso del crecimiento por el crecimiento” (Latouche, 2008: 140). Pero usar el término decrecimiento tiene como objetivo precisamente estimular la reacción, llamar la atención de que salir del crecimiento económico es necesario. Aunque se trate de una palabra molesta, “hay que defender la radicalidad del término decrecimiento y entender éste como un ariete que penetra hasta el fondo del pensamiento único y contesta, así, la ceguera psicológica en la que estamos inmersos” (Taibo, 2009: 72).

Con todo, algunos adjetivos han sido adheridos con tal de hacer la idea más comprensible: decrecimiento económico (Cheynet, 2006), decrecimiento sostenible (Clémentin y Cheynet, 2006) y equitativo (Ridoux, 2009), decrecimiento sereno (Latouche, 2009), decrecimiento justo y selectivo (defienden las corrientes políticas verdes), decrecimiento de la huella ecológica, decrecimiento económico socialmente sostenible (Martínez *et al.*, 2010) o decrecimiento feliz (García, 2010; Bilancini y D’Alessandro, 2012). El concepto plantea, en uno u otro caso una propuesta subversiva, porque “para reducir el volumen del crecimiento económico será necesario adoptar una nueva cultura del bienestar basada no en la acumulación material, sino en otros valores hasta ahora minusvalorados a favor de la producción económica” (Fundación Terra, 2009: 18-19).

El decrecimiento así definido por S. Latouche (2008), una de las voces más representativas de este emergente paradigma, es “abandonar el objetivo del crecimiento por el crecimiento, cuyo motor es la búsqueda de beneficio por los poseedores de capital y cuyas consecuencias son desastrosas para el medio ambiente” (Latouche, 2008: 16). En esta dirección, también se ha definido el decrecimiento como una “reducción voluntaria del tamaño del sistema económico, que implica una reducción del PIB y una transformación sostenible de la producción y el consumo” (Schneider, 2010), y “una contracción controlada y planificada para situar las economías del crecimiento en consonancia con las fronteras planetarias, con la creación de un sistema económico en estado estacionario que se encuentre en equilibrio con los límites de la Tierra” (Assadourian, 2012: 23).

Recientemente, el paradigma emergente del decrecimiento también se introduce en la bibliografía geográfica a través de subdisciplinas como la geografía política, económica y urbana. En este sentido, el análisis geográfico parece capaz de incorporar muchos de los conceptos e ideas transmitidos desde el decrecimiento, ofreciendo la posibilidad de abrir nuevos horizontes de análisis territorial tanto a nivel teórico como práctico.

Los estudios geográficos como pone de manifiesto Guaran (2012): (a) Aportan la capacidad de entender las absurdas e insostenibles relaciones entre la humanidad y los recursos naturales, pudiendo promover otros comportamientos territoriales; (b) Reflexionan sobre los patrones de consumo del espacio, introduciendo nuevas lógicas de planificación para el uso del suelo y el paisaje; (c) Plantean una organización territorial que conecta los principios humanos y sociales por encima de los económicos; (d) Cuestionan la distribución de los recursos entre los diferentes países, rompiendo el esquema tradicional donde los países del norte tienen la legitimidad de explotar los países del sur; (e) Ofrecen una nueva lectura de las dinámicas territoriales derivadas

de la globalización y sus principales actores: las empresas transnacionales. Además, promueven el conocimiento de las realidades locales; (f) Fomentan una cultura de la suficiencia respecto al consumo de recursos y las grandes transformaciones territoriales; (g) Refuerzan las prácticas educativas respetuosas hacia los valores territoriales.

En el sentido amplio de la crítica a los modelos espaciales derivados del crecimiento económico “tan sólo la geografía cuenta con más de cien años postulando enfoques integradores de lo social y lo ambiental” (Bocco y Urquijo, 2010: 261) capaces de cuestionar el significado del propio crecimiento, así como sus impactos sociales y ambientales. De hecho “desde la geografía regional de la primera mitad del siglo XX ya se habían planteado cuestiones muy cercanas a lo que hoy se llaman políticas de sostenibilidad, una de las tradiciones truncadas a partir de la especialización temática de la segunda mitad del siglo” (Murray *et al.*, 2005). “La división cada vez mayor de la disciplina contribuyó a alejar a los geógrafos de las cuestiones fundamentales de interés ambiental en la sociedad contemporánea” (Unwin, 1995: 263). Sin embargo, ante las dimensiones de la crisis económica y ecológica actuales, la geografía parece recuperar el interés, las perspectivas y las herramientas de análisis heredadas desde una tradición geográfica ecocrítica. Así, en los últimos años se difunden análisis críticos conceptualmente muy sofisticados, basados en modelos de pensamiento crítico, tratando de encontrar respuestas y preocupados por cuestiones de justicia social, reequilibrios territoriales, impactos medioambientales, etc. (Casellas, 2010).

4. Una breve geografía de la crisis inmobiliaria en España

En una opinión compartida por diversos analistas, la crisis financiera muestra un comportamiento geográficamente diferenciado, muy dependiente de los distintos contextos territoriales (French *et al.*, 2009; Wójcik, 2009), debido a factores de naturaleza local y que se encuentran espacialmente fijados. Entre éstos, se ha destacado “la demanda de vivienda y de préstamos hipotecarios, el estado del parque de viviendas preexistente, las características de las economías locales y el mercado laboral, las fuentes de ingresos municipales o el volumen de la construcción residencial nueva” (Martin, 2010: 597). En otras palabras, la reciente crisis financiera constituye un ejemplo llamativo del denominado proceso de *glocalización*; de cómo los mercados locales de vivienda e hipotecas han sido vinculados y desestabilizados por los mercados financieros mundiales:

Por un lado, la globalización ha deslocalizado los circuitos financieros locales, conectándolos a las redes del mercado financiero mundial, de manera que los efectos locales son altamente dependientes del comportamiento y de las decisiones de actores e instituciones alejadas en términos geográficos, funcionales y relacionales. Pero al mismo tiempo, este proceso ha localizado lo global, en el sentido de que las transacciones financieras mundiales, los mercados y los capitales de agentes e instituciones globales, se han conectado confusamente con lo local, y dependen de las condiciones y de los procesos que operan en los circuitos financieros locales (Martin, 2010: 591).

Pero la antigua geografía de los mercados de vivienda e hipotecas locales no ha sido sustituida por un mercado mundial de la vivienda, sino por una cadena que comienza con un préstamo hipotecario sobre una propiedad inmobiliaria en la escala local; luego se vuelve global a través de las relaciones financieras establecidas por los prestamistas; y finalmente vuelve a la escala local en forma de préstamos con notables intereses (Aalbers, 2009). La clave está, entonces, en la articulación de una lógica financiera durante el *boom* que atrapó a todos los actores envueltos en la esfera inmobiliaria, generando un círculo de dependencia hacia el dinero financiero que se rom-

pió cuando los compradores de vivienda dejaron de responder a sus préstamos y se generalizó la morosidad. La vivienda seguía estando ahí, lo que había dejado de circular era el flujo crediticio que había sostenido la demanda durante la década anterior.

Desde finales de 2006 el negocio inmobiliario ha dejado de ser rentable, arrastrando consigo a los agentes sociales y las entidades territoriales “que han participado de la *fiesta del ladrillo* y de los megaproyectos que han conseguido atesorar elevadas sumas de dinero en sus diferentes modalidades” (Murray y Blázquez, 2009: 48). El estallido de la burbuja inmobiliaria internacional en agosto de 2007 acababa con un aumento extraordinario del parque residencial en países como Estados Unidos, Irlanda, Italia o España; una sobreoferta de suelo urbanizado con evidencias de concentración de la propiedad en manos del tándem financieras-promotoras y finalmente con la paradoja de la carestía de los precios del suelo y la vivienda, argumento último con el que siempre se ha tratado de justificar los excesos de la construcción (Gaja, 2011).

En su dimensión territorial y urbana no se ha producido un desinflado ordenado, sino una corrección brusca, que se traduce en la proliferación de los llamados *activos tóxicos* de la literatura económica. Esto es, los inmuebles y suelos urbanos que se habían convertido en “el medio de pago y en un instrumento de depósito de valor (del dinero)” (Murray y Blázquez, 2009: 48), toman la forma de acreencias sobre deudas (de compradores de vivienda o promotoras inmobiliarias) y no serán pagadas a los bancos que habían financiado la inversión correspondiente (Martínez, 2009). En este escenario, desciende el volumen de vivienda en construcción y sus derivadas transacciones inmobiliarias, pero aumenta de manera paralela el *stock* de vivienda nueva y el suelo urbano vacante, producto de años de euforia del sector inmobiliario.

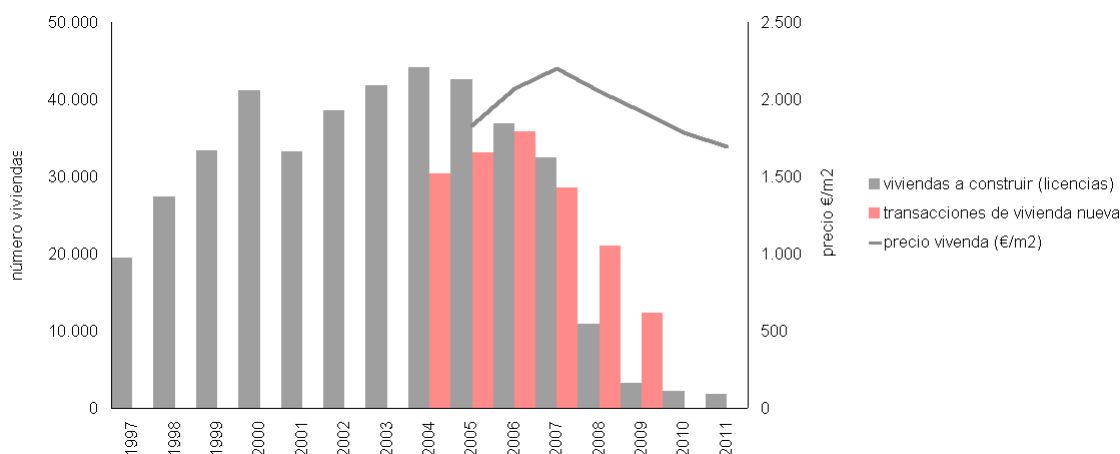
En España, según datos del Ministerio de Fomento, el volumen de vivienda iniciada se reduce en más de un 95% entre 2006 y 2013, pasando de las 737.186 del primer año a las 31.236 del segundo. Por su parte, las operaciones de compraventa de vivienda se reducen en 607.881 unidades durante el quinquenio 2006-2011. En consecuencia lo que se identifica es un aumento del parque edificado sin salida en el mercado, que en 2010 ronda las 700.000 viviendas³, cuando en 2005 esta cifra se situaba en las 195.184 unidades según datos de Fomento. El volumen de *stock* edificado experimenta un salto cuantitativo desde la segunda mitad de 2007 debido al aumento de “las diferencias entre las viviendas terminadas y las viviendas vendidas de nueva construcción” (Ministerio de Fomento, 2011: 3). Se trata de viviendas que han quedado en manos de promotoras o bancos y cajas que habían avalado su construcción, y que por su precio, localización o condición (en muchas ocasiones se trata de viviendas en urbanizaciones orientadas a la función turística) no encuentran una demanda capaz de absorberlas.

Pero a la proliferación de vivienda en *stock*, se añade otro fenómeno que, por su repercusión sobre la gestión territorial y su dimensión espacial, cobra un destacado interés dentro del estudio de la geografía urbana. Se trata del suelo urbano y urbanizable vacante, es decir, los sectores comprometidos a la urbanización que, por contra, se encuentran sin edificar o han quedado paralizados en sus fases iniciales. Un tipo de suelo en crecimiento durante los últimos años, con una dimensión que en el conjunto del país se situaría, en 2014, en torno a las 513.391 hectáreas según la Dirección General de Catastro, es decir, prácticamente la mitad de las superficies que en 2006 (siguiendo la nomenclatura del *Corine Land Cover*) eran consideradas artificiales (1.019.481 hectáreas), lo que demuestra el potencial urbanizador latente de muchas regiones españolas.

3. Otras estimaciones sitúan la cifra de *stock* edificatorio para el año 2011 en 818.117 (Oliver, 2012) y 1,02 millones (*Eleconomista.es*).

Con todo, en ámbitos donde la vivienda vacacional tiene un mayor peso, los indicios de fatiga ya se detectaron incluso antes del *crash* inmobiliario, coincidiendo con varios factores como la aparición de nuevos destinos competitivos en este sector, los elevados precios que las viviendas alcanzan en estas zonas, e incluso los numerosos casos de corrupción e irregularidades⁴ que parecen distanciar a una demanda ya en declive. Es el caso de la provincia de Alicante (Gráfico 1), con unas dinámicas inmobiliarias que reproducen, con sus peculiaridades, las experimentadas por el conjunto del Estado.

Gráfico 1. Indicadores de cambio de ciclo inmobiliario en la provincia de Alicante



Fuente: Dirección General de Programación Económica del Ministerio de Fomento. Elaboración propia.

5. El mapa residencial inacabado de la provincia de Alicante

5.1. Trayectoria territorial y estructuras heredadas

La provincia de Alicante inició en los años 1950 un proceso de transformación estructural de su base económica, que supuso la sustitución o renovación de las actividades preexistentes y de la caracterización social, profesional y demográfica, en paralelo a una ocupación intensiva del territorio y un desbordamiento -especialmente en el litoral- de la urbanización (Vera, 1987). La reestructuración del modelo territorial alicantino durante los últimos 60 años ha estado condicionada por un esquema económico cuyo fin es el crecimiento y el logro del máximo beneficio. Una economía supuestamente moderna que se ha concretado en el éxito de la función turística, la construcción inmobiliaria y los servicios que requieren una escasa capacitación. Pero los pilares de este modelo de desarrollo socioeconómico han supuesto una gran movilización de recursos territoriales, muchas veces torpemente planificados y gestionados que han tenido como resultado una ingente transformación urbanística y paisajística.

En líneas generales, la transformación territorial es producto de la dispersión de la población por el territorio, la desconcentración de las actividades productivas y el crecimiento de las dotaciones y de las diversas infraestructuras, que se produce fundamentalmente en las zonas litorales y prelitorales a raíz del despegue turístico. En efecto, la actividad turística, responsable de la modernización económica provincial, se ha convertido en “un sector de actividad que sobrepasa y

4. *Cinco Días* (09/10/2006). «El boom inmobiliario toca techo en la costa de Alicante, Málaga y Almería».

destruye los equilibrios más elementales de la ocupación del suelo, la preservación de los paisajes naturales y culturales, y el consumo de recursos naturales, especialmente el agua” (Gozálvez *et al.*, 2005: texto on-line). Se trata de un proceso que se inicia y consolida durante los años setenta y que “se manifiesta espacialmente a través de los ensanches urbanos turísticos” (Vera, 1987: 19), que han supuesto una casi completa ocupación urbana y rururbana de los más de 198 kilómetros de litoral (Gozálvez, 1985).

El proceso de concentración de la urbanización y posterior dispersión ha estado en buena medida vinculada al turismo; y viceversa. Las zonas urbanas se localizan principalmente en los municipios litorales turísticos donde también se producen las mayores acumulaciones de vivienda y densidades de población. “Si la primera ocupación de la costa se realizó con torres de apartamentos con una cierta densificación” (Gozálvez *et al.*, 2005: texto on-line) y una ocupación urbana del suelo moderada, a partir de los años setenta se favorece la constitución de “un modelo de crecimiento cuya evolución queda ligada de manera fundamental al desarrollo del turismo y la construcción” (Díaz y Lourés, 2008: 82). Este modelo se ha reproducido durante las siguientes décadas en toda la franja litoral, destacando los cuatro arcos costeros formados por los núcleos de Dénia, Benidorm, Alicante y Santa Pola-Torre Vieja, pero su influencia rebasa en los últimos años las fronteras del litoral funcional, saltando hacia el interior y generalizándose por municipios hasta ahora ajenos a las dinámicas turísticas. De hecho, según los planes urbanos aprobados ya en 1980, el 4,56 % del territorio tendría una finalidad turístico-residencial (Gozálvez, 1985), participando del mismo tanto localidades marítimas como rurales o industriales de interior.

A mediados de los años noventa se inicia en la provincia de Alicante una nueva etapa de expansión de la urbanización y modernización de las economías locales: una transformación territorial sin precedentes que dilata los mercados inmobiliarios y la vocación turística por muchas de las zonas que, hasta el momento, habían mantenido una trayectoria diferenciada. En la búsqueda de la competitividad que impone una supuesta economía global impone, los municipios alicantinos, en base a sus estructuras heredadas, inician un proceso de reestructuración (posiblemente definitivo) que transformará los patrones físicos del territorio, el paisaje, las condiciones sociales y profesionales, además de las culturales y políticas.

El crecimiento de la urbanización y de la edificación en la provincia de Alicante durante el periodo 1997-2006 destaca por su intensidad temporal y sus efectos espaciales extensivos. En sólo una década muchos municipios han culminado el proceso de transformación de su morfología urbana a favor de las tendencias del urbanismo expansivo, con una ingente producción residencial y unos efectos aparentemente positivos sobre las economías locales y el mercado laboral. En este periodo, en el conjunto de municipios alicantinos se han concedido licencias para la construcción de más de 350.000 nuevas viviendas, con un potencial demográfico para dar cabida a casi un millón de nuevos habitantes; el suelo comprometido para la urbanización⁵ supera el 10 % del total de la superficie provincial; y el empleo en el sector de la construcción ocupa a uno de cada cinco trabajadores en 2006. En paralelo, el valor del patrimonio inmobiliario del suelo urbano y el precio de la vivienda ha ascendido como nunca antes lo había hecho, identificando expansión de la urbanización con crecimiento económico y enriquecimiento general (Cuadro 1).

5. Suelo urbano y urbanizable según el planeamiento municipal de 1998.

Cuadro 1. Indicadores de la actividad inmobiliaria municipal, 1997-2006

| Áreas Funcionales (según ETCV) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|-------|---------|-------|--------|-------|
| La Marina Alta Cabecera: Dénia 33 municipios | 21,66 | 43.566 | 34,77 | 152,38 | 27,44 |
| La Marina Baixa Cabecera: Benidorm 18 municipios | 12,91 | 37.442 | 22,62 | 135,72 | 19,39 |
| Alicante - Elx Cabeceras: Alicante, Elche 13 municipios | 12,71 | 94.860 | 12,82 | 79,55 | 19,23 |
| La Vega Baja Cabeceras: Orihuela, Torrevieja 27 municipios | 11,63 | 146.174 | 34,16 | 267,39 | 30,06 |
| Alcoi Cabecera: Alcoi 32 municipios | 4,26 | 10.671 | 18,26 | 120,80 | 17,61 |
| El Vinalopó Cabecera: Elda 18 municipios | 3,58 | 20.834 | 8,88 | 68,16 | 17,05 |
| Total Provincia de Alicante 141 municipios | 10,12 | 353.547 | 20,10 | 126,37 | 21,42 |
| (1) Superficie comprometida a la urbanización sobre el total del territorio (%), 1998 | | | | | |
| (2) Licencias municipales de obra: Total viviendas a construir, 1997-2006 | | | | | |
| (3) Transacciones de viviendas nuevas por cada 1.000 habitantes, 2006 | | | | | |
| (4) Incremento del valor del patrimonio inmobiliario (%), 1998-2006 | | | | | |
| (5) Empleo en la construcción sobre el empleo total (%), 2006 | | | | | |

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Elaboración propia.

5.2. Situación tras el cambio de ciclo inmobiliario

Al final del ciclo inmobiliario, la provincia de Alicante cuenta con 678 viviendas por cada 1.000 habitantes, una cifra que supera sin dificultades la de Reino Unido (379); Francia (447) (Gaja, 2011) y que se sitúa por encima de la española (534). La vivienda vacacional y las migraciones residenciales han forzado la sobreoferta inmobiliaria que flexiona en el momento en el que la vivienda alcanza precios desorbitados (2.200 €/m² de media en 2007) y la inversión inmobiliaria deja de ser atractiva, en paralelo a las dificultades crediticias. Los síntomas de agotamiento empiezan en 2004 cuando las licencias de construcción de vivienda nueva empiezan a descender; en 2006 comienzan a retroceder las transacciones; y finalmente lo hace el precio de la vivienda en un valor del 22,9% entre 2007 y 2011. Las licencias de obra a construir de nueva planta se reducen en un 95,2% entre 2006 y 2011, pasando de las 36.885 licencias del primer año, a las 1.763 del segundo. En paralelo, las transacciones de vivienda nueva caen en un 65,7% durante el trienio 2006-2009, cuando se pasa de 35.843 operaciones a 12.302. Un retroceso que se produce con especial intensidad en aquellos municipios litorales y prelitorales que han dejado de recibir el volumen de inmigrantes residenciales registrados en años anteriores.

Con el cambio de ciclo, el volumen de vivienda nueva sin vender en 2011 es de 48.920 unidades (Ministerio de Fomento, 2013), lo que supone un 3,8% del parque edificado alicantino, todo ello sin incluir las viviendas de segunda mano en venta, las segundas residencias ni las viviendas desocupadas (estas últimas pueden superar las 200.000 según el último censo de vivienda). Además, esta cifra podría ser muy superior si se consideran los inmuebles que forman parte de operaciones urbanísticas paralizadas o si se contemplara el volumen total de viviendas previstas en los suelos comprometidos a urbanización en el planeamiento municipal.

En la escala municipal, la cultura territorial y urbanística vigente, dentro de un modelo enraizado en el desarrollismo y el productivismo, no ha entendido la intervención sin crecimiento (Gaja 2012). Los instrumentos de planificación territorial y urbana han estado al servicio de las políticas de *crecimiento a toda costa*, promocionando un modelo donde la estrategia ha sido la de disponer abundante suelo urbanizable, actuando además con lógicas meramente locales. Pero la experiencia de los últimos años ha demostrado que esta fórmula ha sido una «osadía geoestratégica restringida por la simple inelasticidad del espacio, al ser insostenible en sus dimensiones físicas, económicas y ecológicas» (García, 2004: 5). «El mero ejercicio de sumar las proyecciones de grupos de municipios colindantes bastaría para desacreditar los desmesurados crecimientos poblacionales previstos y las abultadas ofertas inmobiliarias que muchos ayuntamientos pretenden justificar» (Mata, 2007: texto on-line), demostrando en este caso que «la visión global regional es urgente e irrenunciable» (García, 2004: 7), si se quiere repensar el futuro urbanístico de los territorios (Cuadro 2).

Cuadro 2. Situación actual (2011) y previsiones de crecimiento urbano y edificatorio en contextos supramunicipales de la provincia de Alicante

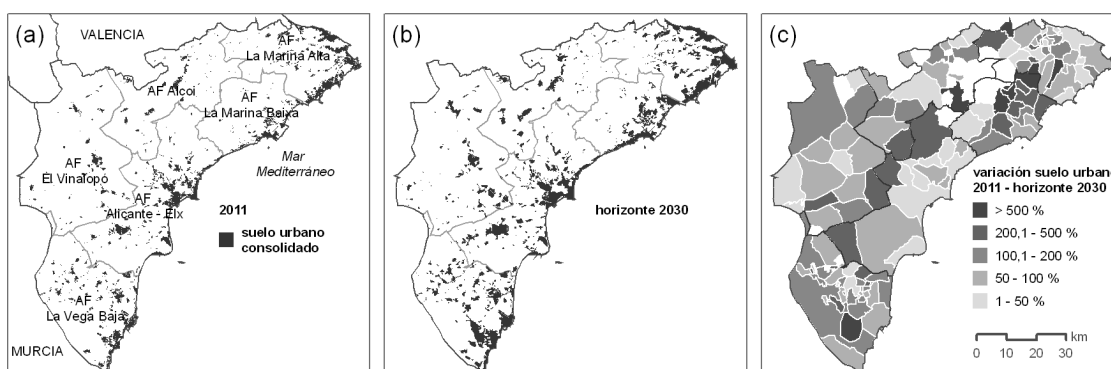
| Áreas Funcionales (según ETCV) | Suelo urbano 2011 | | | Viviendas 2011 | | |
|---|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | Consolidado (hectáreas) | Comprometido (hectáreas) | Previsión de crecimiento (%) | Existentes | Previstas en planeamiento municipal | Previsión de crecimiento (%) |
| La Marina Alta Cabecera: Dénia 33 municipios | 9.932 | 6.919 | 70 | 161.815 | 82.282 | 51 |
| La Marina Baixa Cabecera: Benidorm 18 municipios | 3.634 | 5.744 | 158 | 136.950 | 79.402 | 58 |
| Alicante - Elx Cabeceras: Alicante, Elche 13 municipios | 11.377 | 6.878 | 60 | 445.109 | 102.950 | 23 |
| La Vega Baja Cabeceras: Orihuela, Torrevieja 27 municipios | 8.981 | 10.054 | 112 | 329.647 | 212.543 | 64 |
| Alcoi Cabecera: Alcoi 32 municipios | 2.817 | 2.499 | 89 | 81.083 | 17.465 | 22 |
| El Vinalopó Cabecera: Elda 18 municipios | 3.417 | 3.484 | 102 | 119.497 | 53.705 | 45 |
| Total Provincia de Alicante 141 municipios | 40.157 | 35.579 | 89 | 1.274.101 | 548.347 | 43 |

Fuente: Figuras de planeamiento municipal y Sistema de Información Urbanística (CITMA, Generalitat Valenciana).
 Elaboración propia.

Pese al estallido de la burbuja inmobiliaria, los municipios prorrogan sus previsiones de crecimiento y rara vez se revisan algunas de las sobredimensionadas propuestas de urbanización, reflejadas en las cifras que se producen en determinadas áreas de la provincia. Desde mediados de 2006, «los planes urbanísticos continúan avanzando en su tramitación sin modificar su expansivo planteamiento, e incluso otros municipios inician planes nuevos de características similares» (Burriel, 2009a: 41) en un contexto económico y social adverso.

A falta de límites al crecimiento urbano, la situación de los municipios alicantinos se caracteriza por la provisionalidad y la incertidumbre de sus modelos de desarrollo urbano. Existe un enorme volumen de suelo comprometido a la urbanización y de viviendas previstas dentro del planeamiento vigente cuya ejecución algunas veces se ha iniciado, pero otras ha quedado bloqueada a la espera de una hipotética reactivación económica y productiva. Es lo que Gaja (2008b) ha denominado «urbanismo durmiente»; operaciones urbanas latentes, inviables e irrealizables, que saltan del papel a la realidad cuando las circunstancias lo favorecen. Las cifras estimadas confirman esta tendencia. En 2011, en la provincia de Alicante el suelo urbano consolidado alcanza las 40.157 hectáreas. Sin embargo, existe suelo clasificado para urbanizar otras 35.579 hectáreas (Mapa 1); es decir, una superficie comprometida que casi iguala la actual dimensión urbana de las ciudades alicantinas, donde podrían tener cabida casi 550.000 nuevas viviendas (Mapa 2)⁶.

Mapa 1. Suelo urbano consolidado (2011) y comprometido a urbanización



Fuente: Figuras de planeamiento municipal y Sistema de Información Urbanística (CITMA, Generalitat Valenciana).
Elaboración propia.

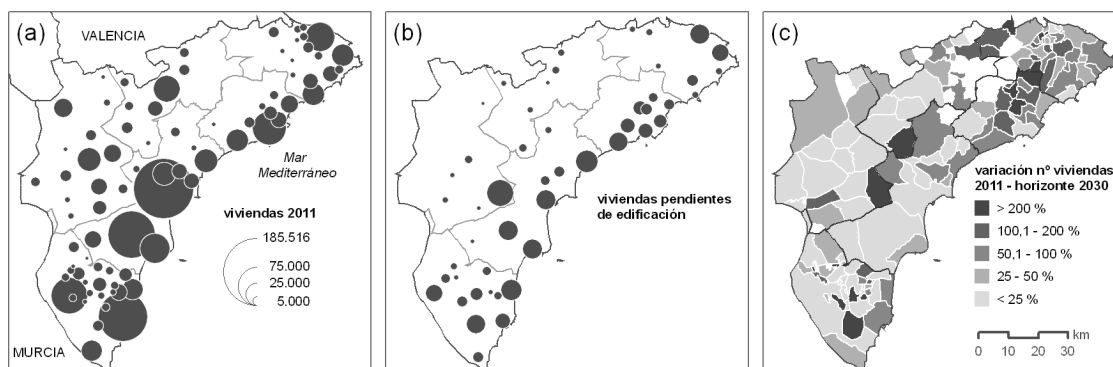
El suelo urbano consolidado, sitúa a la provincia de Alicante y al conjunto de las seis áreas funcionales que la conforman como uno de los ámbitos más urbanizados de España en 2011 (a). Con todo, el crecimiento urbano previsto en las figuras de planeamiento municipal, abre un escenario donde los suelos urbanizados podrían duplicarse en tan sólo 20 años (b). A escala local, esto implica el práctico agotamiento de espacios libres en los municipios litorales, aunque los grandes crecimientos relativos tienden a darse en localidades prelitorales y de interior (c).

De aplicarse todas las propuestas urbanísticas vigentes, esto supondría un aumento del 89% del suelo artificial urbanizado en el conjunto de la provincia, y un incremento del parque inmobilia-

6. Las estimaciones son propias. El cálculo se ha realizado a partir del cruce de la información urbanística <www.cma.gva.es> y de coberturas de suelo <www.cnig.es>. El suelo urbano consolidado es aquel clasificado como suelo urbano en los planes municipales en 2011, al cual se le incorpora las zonas urbanas delimitadas por el *Corine Land Cover* en 2006. El suelo urbano comprometido, clasificado para urbanizar, resulta de cruzar el Suelo Urbanizable con las zonas urbanas del *Corine Land Cover*: cuando éstas no coinciden, se entiende que son suelos expectantes y de urbanización futura.

rio del 43% con evidencias de concentración en las áreas litorales (sobre todo La Marina Alta y La Vega Baja), pero con una dinámica expansiva hacia otras áreas del interior (El Vinalopó y Alcoi).

Mapa 2. Viviendas existentes (2011) y pendientes de edificación



Fuente: Figuras de planeamiento municipal y Sistema de Información Urbanística (CITMA, Generalitat Valenciana).
Elaboración propia.

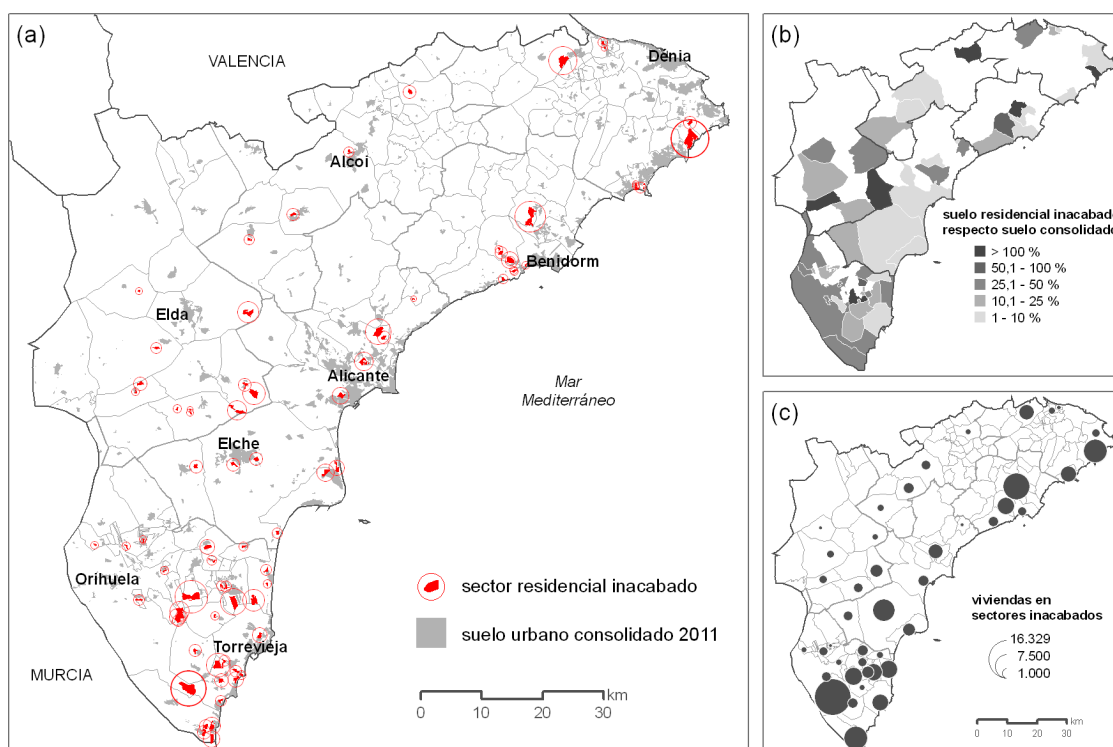
En la provincia de Alicante hay censadas más de 1,2 millones de viviendas en 2011, de las cuales, una mayoría se localizan en municipios litorales (a). De éstas, una parte importante son destinadas al uso secundario o vacacional, pero además existe un volumen de unas 200.000 viviendas vacías. A pesar de ello, los planes urbanísticos municipales presentan un potencial de crecimiento inmobiliario que puede superar las 500.000 nuevas viviendas en las dos próximas décadas (b), por lo que algunas localidades podrían experimentar notables incrementos de su parque inmobiliario de reactivarse el interés económico por este sector (c).

Finalmente, un problema más inmediato lo constituyen los sectores residenciales inacabados, definidos como «zonas urbanas sin edificar» (Zornoza, 2014: 324), cuya apariencia es la de espacios en vías de urbanización paralizados que salpican las periferias de ciudades y pueblos. En este sentido, Zornoza (2014) identifica tres tipologías de suelos residenciales inacabados, diferenciando entre «aquellos lugares donde se ha reparcelado el terreno con viales y otros servicios pero donde la mayoría de suelo se encuentra sin edificar; solares de tamaño medio en zonas con mayor consolidación y donde la urbanización es completa; y por último los solares de reducidas dimensiones dispersos en zonas residenciales de baja densidad» (Zornoza, 2014: 325). Según esta investigadora y a partir de cálculo y filtrado de los datos que ofrece la base de datos SIOSE para el año 2009, tan sólo en la provincia de Alicante se contabilizaría una superficie de 5.606,9 hectáreas con estas características.

Según los cálculos realizados para el presente trabajo, y tomando como referencia solamente la primera tipología de suelos no edificados definidos por Zornoza (2014), siendo éstos lo que tienen una mayor extensión territorial y dimensión espacial, para el año 2011 se registraría un volumen de 4.708 hectáreas de suelo residencial inacabado dentro de los municipios de la provincia de Alicante, sobre los cuales habría dejado de edificarse casi 100.000 viviendas⁷ (Mapa 3).

7. Por *suelo urbano inacabado* se entiende los sectores residenciales que se encuentran en fase de urbanización. Corresponden a suelo urbanizable que, a partir de la fotointerpretación y el trabajo de campo se ha podido comprobar que están en fase de construcción o urbanización inacabada. Las viviendas pendientes de construcción se han extraído directamente de la información urbanística municipal o a través de fuentes indirectas (especialmente noticias de prensa). Cuando no se ha obtenido en valor, se ha estimado un volumen de construcción de 13 viviendas por hectárea, que corresponde con el valor medio para los municipios de los que sí se dispone de la información.

Mapa 3. Espacios residenciales inacabados en la provincia de Alicante



Fuente: Figuras de planeamiento municipal y Sistema de Información Urbanística (CITMA, Generalitat Valenciana).
 Elaboración propia.

El volumen de suelo comprometido a urbanización, así como la construcción de viviendas parece seguir valorándose como un síntoma de dinamismo económico. «La vinculación del crecimiento del espacio urbano con el progreso y la prosperidad económica son argumentos que inducen a pensar en la conveniencia de un aumento de la construcción sin límites, al margen de que las viviendas sean o no necesarias o del uso que se les vaya a dar o, incluso, de que vayan o no a tener algún uso alguna vez» (Vinuesa, 2008: texto on-line). Este hecho viene contrastado no sólo por el volumen de vivienda que se ha dejado de construir en los espacios residenciales inacabados. Además, cabe destacar el volumen de vivienda vacía existente en las principales ciudades que, según el Censo de Población y Viviendas de 2011 del INE, se sitúan en 202.729 inmuebles. Estos, junto a las 317.681 viviendas de uso secundario, suponen cerca del 42% de todo el parque edificado de la provincia.

Esta situación no parece exclusiva de ningún municipio ni área funcional. Con pocas excepciones, al final del ciclo inmobiliario se acumulan enormes *stocks* de suelo urbanizable y viviendas que condicionarán las dinámicas territoriales durante años. Esto se producirá en el interior de los propios límites administrativos municipales; aunque debido a la extensión de las relaciones funcionales entre localidades y al carácter cada vez más amplio de los mercados de suelo y vivienda, las implicaciones tendrán un contenido espacial mucho más amplio.

Con el cambio de ciclo inmobiliario la perspectiva municipal debería ser otra. La crisis financiera tiene notables implicaciones territoriales que las municipalidades deben gestionar. Pero la cultura y acción territorial vigentes se intuyen insuficientes a la vez que indeseables, por lo que parecen precisas nuevas formas de entender y gestionar el territorio.

6. Renovadas estrategias para un territorio agotado

El crecimiento económico ha derivado en unas ciudades y unos territorios sobredimensionados con una creciente huella ecológica y una deficiente gestión económica y social, que hace cuestionar el significado de la calidad de vida en las áreas urbanas. En algunos casos, la planificación urbana y territorial se ha convertido en un instrumento de ordenación económica del espacio físico, anteponiendo los intereses de las inversiones monetarias a la capacidad de acogida del territorio, y relegando cualquier posibilidad de control democrático por parte de la ciudadanía. El caso valenciano ha sido un ejemplo (Gaja, 2001; Burriel, 2009a; Romero, 2009). Propietarios de suelo, empresarios de la construcción, entidades de crédito y una parte de la clase política se han beneficiado de la sola transformación de suelos rústicos en urbanizables, la generación de nuevos sectores residenciales y el negocio de la compraventa y especulación de vivienda, todo ello con la complicidad de amplios sectores de una mayoría social.

Mientras tanto, una parte de la ciudadanía se ha visto por extensión arrastrada, dando lugar a nuevos dramas sociales que van desde el paro inducido por el desplome de la construcción al elevado endeudamiento familiar; la incapacidad de hacer frente a las hipotecas contraídas; y los desahucios, cada vez más frecuentes. Otra parte solidaria y organizada de la ciudadanía, ha pasado de reclamar la defensa del territorio y del patrimonio individual y colectivo, a exigir el derecho a una vivienda digna expresado en la Constitución Española de 1978. Las proclamas parecen claras: en un país con aproximadamente 9 millones de viviendas vacías o sin uso principal, hay unas 10 millones de personas que desean y no tienen capacidad de acceder a una vivienda digna. Esto es, 1,1 personas por vivienda desocupada (Reyes, 2010), lo que supone una de las mayores contradicciones sociales de nuestro tiempo.

A todo esto, el territorio y el paisaje se han convertido en teatro de excesos urbanísticos; en soporte de infraestructuras de gran capacidad, densidad y rigidez, que están en la base de la desconfiguración y degradación de suelos; y en marco para la implantación y fomento de actividades económicas cuyo arreglo espacial ha sido muchas veces contra natura y contra paisaje.

A partir de aquí, dos son las gestiones posibles de la crisis: confiar en una recuperación que reactive un modelo de crecimiento controvertido; y reflexionar sobre las amenazas que en todos los aspectos presenta dicho modelo. En el ámbito del uso y la gestión del territorio esto equivale a: (1) Buscar soluciones económica, social y ambientalmente sostenibles a los problemas plasmados en el territorio, basadas en las capacidades técnicas y en una suerte de cosmética en la ordenación territorial, sin cuestionar realmente el significado de la expansión urbana y la artificialización generalizada del territorio; (2) Reconocer que, al igual que son necesarios nuevos paradigmas económicos, las ciudades y los territorios necesitan nuevas ideas y nuevos instrumentos para tratar de gestionar el desorden y reorientar sus propias dinámicas.

Así pues, frente al colapso del modelo económico e inmobiliario, la cuestión urbana y territorial convertida en problema trata de ser abordada desde perspectivas y enfoques relativamente definidos y contrastados. Una primera vía, sería aquella que responde a las soluciones neoinstitucionales derivadas de las políticas de ordenación territorial realmente existentes en la provincia de Alicante con un exponente claro: la recientemente aprobada Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. La segunda vía, mucho más difusa que la primera, cobra importancia como consigna de grupos ciudadanos que tienen un papel destacado en el ámbito local y práctico, identificando variedad de colectivos cívicos, centros de investigación, grupos de voluntariado e incluso empre-

sas e instituciones privadas que tratan de favorecer la recuperación económica, social y ambiental de algunos de los ámbitos que la crisis ha desmantelado.

6.1. Directrices de la planificación territorial vigente

La transformación de territorios agotados, en declive, expuestos a una nueva realidad económica y social, exige «renovar el imaginario colectivo y poner en marcha estrategias concertadas que exploren nuevos caminos para el desarrollo y se traduzcan en medidas concretas» (Méndez, 2012: 227). El objetivo es crear contextos propicios que enfrenten los riesgos e incertidumbres, establezcan objetivos y directrices y, a la vez, dibujen escenarios futuros deseables y creíbles.

Se trata de superar visiones que limitan la atención a los aspectos económicos, para considerar también los «objetivos de la innovación social, que incluyen desde una participación ciudadana más activa a una gestión más eficaz de los asuntos públicos» (Méndez, 2012: 227). Pero además, desde esta perspectiva, resultan necesarias políticas de desarrollo urbano que «permitan construir capacidades colectivas que resistan alteraciones, manteniendo los equilibrios entre las exigencias ambientales, económicas y sociales» (Blanco y Subirats, 2012: 32).

En los últimos años, este tipo de planteamientos son bastante frecuentes en ciudades en declive que buscan políticas dirigidas a la regeneración, transformar la imagen urbana y reforzar sus ventajas competitivas, concentrando recursos en grandes infraestructuras urbanas y territoriales o proyectos representativos relacionados con sectores considerados estratégicos. Más propios de un nivel administrativo local, este tipo de estrategias están empezando a ser trasladados a niveles más amplios como el subregional o regional, aplicando nuevas fórmulas de regulación inspiradas en las políticas de desarrollo económico destinadas a mejorar la posición competitiva de los territorios.

La entrada en vigor de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana a través del Decreto 1/2011 del Consell pretende establecer «los objetivos, metas, principios y directrices para la ordenación del territorio de la Comunitat Valenciana» con la finalidad de conseguir «un territorio más competitivo en lo económico, más respetuoso en lo ambiental y más integrador en lo social». Este instrumento debe orientar la ordenación del territorio alicantino en los próximos años, a través de fórmulas que combinan las políticas de desarrollo urbano con los nuevos enfoques de la gobernanza territorial, basados en la coordinación en los procesos de toma de decisiones y en una mayor participación pública.

La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (en adelante ETCV) tiene como propósitos identificar objetivos y acciones estratégicas a desarrollar, definir una estructura territorial y las características de las áreas funcionales, concretar los criterios para la coherencia de políticas sectoriales entre sí y con la planificación territorial, o establecer las directrices para las estrategias territoriales en escala inferiores. Se trata, en definitiva, de un documento muy general, «un marco para la toma de decisiones territoriales en el que se establecen objetivos, directrices y criterios para la ordenación del territorio a largo plazo» (Larrosa, 2012: 466), para los que se establecen seis ejes de actuación prioritarios, cien metas y más de mil quinientos proyectos con incidencia territorial, basados en 25 objetivos estratégicos.

El proceso de elaboración de la ETCV se gesta en el marco de la Ley valenciana de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. Su enunciado en el año 2004 se produce en la cúspide del anterior ciclo económico y urbanístico expansivo, siendo probablemente la mejor oportuni-

dad para aplicar estructuras de planeamiento estratégico en un territorio expuesto a intensísimas transformaciones.

La ETCV constituye en cierto modo la consecución de muchos de los informes y planes territoriales elaborados en la comunidad desde la aprobación de la primera Ley de Ordenación del Territorio de 1989, que ya establecía su propio documento estratégico y que nunca llegó a ser desarrollado. La ETCV recupera buena parte de las directrices y objetivos que además asumían los diferentes planes de acción sectoriales o integrados que han sido propuestos a lo largo de los últimos 20 años, y en particular, del Plan de Desarrollo Urbanístico de 1995, con el que la nueva estrategia comparte muchos de sus objetivos y orientaciones (Burriel, 2009b). En cualquier caso, la ETCV entra en vigor en 2011 con muchos años de retraso respecto de otros planeamientos estratégicos autonómicos; dieciséis años después de la elaboración de un documento similar como fue el Plan de Desarrollo Urbanístico; y siete años después de ser anunciada por la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, un periodo durante el cual se han elaborado varios planes subregionales y sectoriales que no han pasado de la fase de exposición pública, con la consiguiente ausencia de un marco de ordenación territorial de ámbito regional (Salom, 2011).

Cuando el proceso de elaboración de la ETCV culmina en 2011, el contexto territorial, económico, urbanístico y social es notablemente diferente al existente en el momento en que ésta se plantea. El nuevo planeamiento estratégico se enfrenta a una realidad económica y social incierta, que requiere un conjunto de directrices y objetivos orientados a la consecución de una mayor eficiencia territorial y beneficio social como clave de superación de la crisis. En este sentido, y como el propio preámbulo del Decreto 1/2011 reconoce, la Estrategia es

tal vez el primer documento de planificación espacial adaptada a la nueva realidad económica y social de la que, sin ninguna duda, se derivarán grandes cambios del modelo territorial en forma de retos y oportunidades globales que se plantea en un horizonte inmediato.

El territorio es entendido como un factor de competitividad, por lo que la reordenación de un modelo territorial agotado es una premisa fundamental en la atracción de inversiones, población cualificada o en la mejora de la calidad de vida. La ETCV propone un nuevo modelo territorial que se adapte a la crisis, e incluso se refiere a un escenario postcrisis en el que la sociedad valenciana saldrá reforzada, donde:

se producirá un uso más intensivo del territorio que, además, irá en paralelo con la concentración de actividades innovadoras, generadoras de mayor valor añadido, en espacios cada vez más selectivos (.). Serán territorios preparados para atraer el capital humano de mayor talento, con elevada calidad de vida, del paisaje y de su medio ambiente, con personalidad y vida urbana activa.

En síntesis, la ETCV supone un avance en 6 ámbitos significativos y especialmente conflictivos en la ordenación del territorio valenciano durante las últimas décadas Cuadro 3), cuya revisión y aplicación podría suponer elementos propicios cara a la consecución de escenarios territoriales estratégicos.

El *primer ámbito* es el referido a la *gestión de los asuntos públicos con incidencia en el territorio*, al gobierno efectivo del territorio. La Estrategia trata de iniciar una nueva etapa en la que las decisiones que afecten al territorio gocen de una mayor aceptación política y social, y sean a la vez producto del máximo consenso posible. La llamada nueva gobernanza tiene un papel destacado.

Cuadro 3. Directrices de la ETCV

| |
|---|
| <p>1. El gobierno del territorio</p> <ul style="list-style-type: none">- Administraciones públicas como activos imprescindibles en la competitividad del territorio.- Nueva gobernanza, donde la acción pública esté asociada con el conjunto de la sociedad y la iniciativa privada.- Visión supramunicipal, basada en la constitución de entes territoriales flexibles y operativos en una escala intermedia entre el municipio y la comunidad autónoma. <p>2. Desarrollo económico y territorio</p> <ul style="list-style-type: none">- Crecimiento económico inteligente, basado en el fomento de la innovación en sectores tradicionales y nuevos.- Crecimiento sostenible, que desligue la calidad de vida del consumo de recursos y la emisión de residuos. <p>3. La Infraestructura Verde del territorio</p> <ul style="list-style-type: none">- Formar una red continua en el territorio de espacios de alto valor ambiental, paisajístico y cultural, junto a zonas expuestas a riesgos de origen natural.- Interacción entre zonas verdes naturales y urbanas.- Conservación activa relacionada con su uso público racional y sostenible.- Revalorización de la actividad agraria desde un punto de vista multifuncional. <p>4. Ocupación racional y sostenible del suelo</p> <ul style="list-style-type: none">- Sostenibilidad de los crecimientos urbanísticos.- Armonización de la demanda de suelo con expectativas razonables de crecimiento demográfico y económico.- Fomento de proyectos de transformación territorial con carácter supramunicipal.- Definición de áreas de oportunidades, nuevas centralidades, intensificación de usos, regeneración. que permitan la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.- Proyección de infraestructuras basada en criterios de cohesión y garantía de disponibilidad para el conjunto de la ciudadanía. <p>5. El litoral</p> <ul style="list-style-type: none">- Gestión integral e integrada.- Favorecer la protección de las zonas libres y su conexión dentro de la Infraestructura Verde. |
|---|

Fuente: Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y elaboración propia.

Su objetivo es el de enfocar la ordenación territorial desde escalas intermedias, que superen la típica visión municipal de la práctica urbanística y sea más concreta que la generalista política regional. La gobernanza es, según la ETCV, más eficiente si se realiza bajo entes de decisión supramunicipales, apoyada en la coordinación entre administraciones y colaboración público-privada, y es además fruto de la participación de los agentes sociales.

Sin embargo, la Estrategia simplemente recomienda, no obliga. La coordinación intermunicipal resulta de la acción voluntaria entre las propias entidades locales que, la mayoría de las veces, se muestran contrarios a procesos que supongan colaboración y búsqueda de objetivos comunes. En una provincia como la de Alicante, la falta de cooperación y el arraigado localismo que se produce en ámbitos como El Vinalopó o Alicante-Elx ha desincentivado cualquier intento anterior de planificación estratégica supramunicipal. La ETCV propone en el mejor de los casos la elaboración de planes de acción territorial integrados. Pero la experiencia dice que los PAT subregionales o sectoriales iniciados hasta el momento no han pasado de sus fases de exposición pública (Salom, 2011), están indefinidos «apenas se han dotado de competencias y, sobre todo, de voluntad para ejercerlas» (Larrosa, 2012: 476).

El segundo de los ámbitos se relaciona con el incentivo a la innovación en el desarrollo económico y territorial. La investigación y algunas experiencias prácticas recientes conducen al convencimiento, casi generalizado, de que «los fenómenos de innovación surgen en territorios concretos, asociados a recursos humanos, de capital, de conocimiento e infraestructurales, los agentes loca-

les y regionales, tanto públicos como privados, que ponen en valor espacios dando lugar a entornos innovadores» (Martínez, 2010: 47). La ETCV identifica y propone un conjunto de medidas orientadas al surgimiento de iniciativas innovadoras considerando la cantidad y calidad de los recursos que ofrece el territorio valenciano.

Las actuaciones públicas en materia de mejora de entornos innovadores se convierte así en una prioridad del planeamiento estratégico; sin embargo, las medidas y actuaciones concretas que propone se disuelven entre faraónicos y difusos proyectos carentes de justificación y realismo. Así por ejemplo, la iniciativa para desarrollar una agenda de investigación centrada en nuevos clusters territoriales como el de la biotecnología, salud y tercera edad, hábitat y construcción sostenible, industria cultural, o energía y agua, resultaría oportuna y viable si no se tuviera en cuenta que los entornos territoriales sobre los que se pretenden desarrollar carecen de redes sociales y de conocimiento, de instituciones formales e informales que puedan garantizar el sostenimiento de estos sectores, ni por supuesto de la densidad institucional característica de los espacios que han sido definidos como distritos o cluster empresariales (Salom y Albertos, 2006) dentro y fuera de la provincia de Alicante en las últimas décadas.

El tercer ámbito destacado corresponde con el *impulso de la Infraestructura Verde como sistema territorial* que, por primera vez, tratará de conectar todos los espacios con valores ambientales, paisajísticos y patrimoniales, sean propios de medios rurales y forestales como de entornos urbanos. Es además un sistema que ya goza de cierto desarrollo al amparo de la red de espacios naturales protegidos ya existente en la Comunidad Valenciana. En este sentido, la ETCV como mucho refuerza esta red y trata de potenciarla a fin de mantener los procesos ecológicos básicos del territorio, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y orientar futuros desarrollos urbanos y territoriales. Es decir, la Infraestructura Verde no introduce criterios de gestión ni obligaciones en los espacios naturales que no existan ya, y sus determinaciones sobre la expansión de usos urbanos y artificiales son apenas disposiciones o recomendaciones sin ninguna eficacia normativa.

El cuarto ámbito se refiere a la *ocupación racional y sostenible del suelo*. La ETCV recomienda criterios para garantizar la sostenibilidad de los crecimientos urbanísticos del territorio en función de las trayectorias urbanísticas y las posibilidades razonables de crecimiento demográfico y urbanístico de los municipios, áreas urbanas y áreas funcionales. Se propone un conjunto de actividades económicas, de implantación de equipamientos y de modelos de crecimiento urbano que deberían reforzar el carácter polinuclear del sistema de ciudades valenciano. Sin embargo, de nuevo, estas directrices carecen de vinculación normativa. La propia ETCV reconoce que el territorio debe organizarse en torno al planeamiento urbanístico como procedimiento para racionalizar el proceso de construcción del mismo. Pero de no variar substancialmente las cosas, las figuras de planeamiento seguirán siendo instrumentos para el crecimiento urbanístico a toda costa, en el mejor de los casos, de imprecisos propósitos para el desarrollo sostenible y la explotación racional de los recursos territoriales.

El quinto ámbito en el que avanza la ETCV es en el *reconocimiento de la incidencia e importancia de las infraestructuras de transporte en el territorio*. Para ello, considera fundamental garantizar la cohesión del territorio a partir de la mayor disponibilidad de infraestructuras físicas, analizando su integración y coordinación para evitar una excesiva fragmentación y afectación al medio geográfico. Sin embargo, la mayor parte de las directrices en materia de infraestructuras se dirigen hacia el crecimiento y diversificación de las mismas, proyectando múltiples viales de gran capacidad, nodos logísticos o plataformas de transporte, entre otras, que deben solventar los

problemas de accesibilidad y conexión en determinados ámbitos y, al mismo tiempo, garantizar su adecuación a los ecosistemas y elementos de interés del territorio. El resultado, es la constitución de una densa red mallada de infraestructuras físicas sobre el territorio que difícilmente se podrá conciliar con otros propósitos en materia de preservación de los equilibrios ecológicos o funcionalidad de los corredores biológicos del territorio.

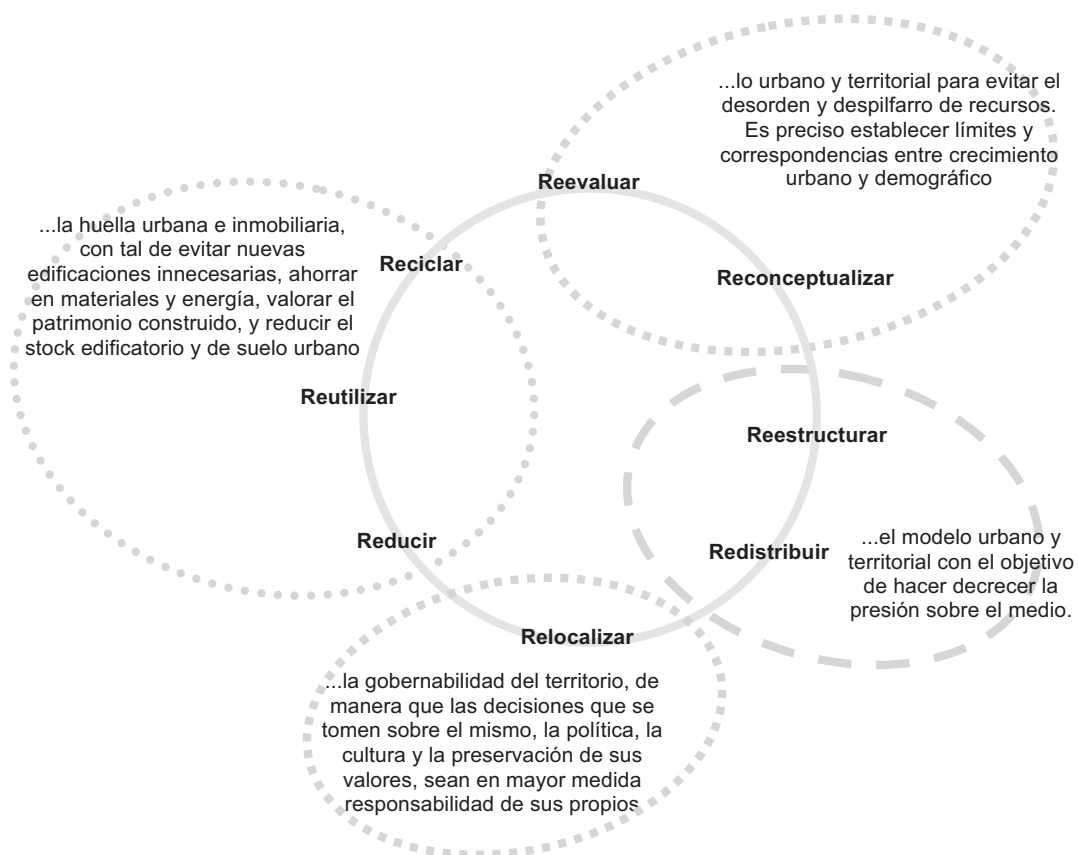
El ámbito sexto corresponde con una *nueva concepción de los espacios litorales*, precisamente aquellos que han sufrido los mayores impactos ambientales en las últimas décadas, fruto de la ausencia de planificación territorial o de la perversa aplicación de la misma. La ETCV pretende desarrollar un análisis integrado del litoral que reconozca sus activos ambientales y paisajísticos, así como las presiones económicas a las que se encuentra sometido, proponiendo directrices específicas basadas en una gestión integral del espacio litoral, que incluyen la consideración estratégica del suelo no urbanizable y que no está protegido por la legislación ambiental. En un litoral como el alicantino, donde prácticamente el 50% del primer kilómetro de costa se encuentra transformado, cualquier propuesta de protección puede ser positiva. No obstante, los conflictos por el uso del suelo que se producen en este delicado espacio exceden las competencias de la ETCV que, pese a sus buenas intenciones, apenas podrá incidir en los problemas seculares de gestión del litoral.

Todo ello conduce a una confusa conclusión de cuál será la eficacia y efectividad real de la ETCV en un marco espacio-temporal que arrastra intensos y múltiples conflictos por el uso y gestión del territorio. La Estrategia, pese a presentarse como un catálogo impregnado de buenas prácticas territoriales con cierto grado de justificación y adecuación a la realidad, ofrece un escenario deseable que será difícil de encajar en función de las dinámicas económicas, sociales y ambientales recientes y vigentes. Una lectura territorializada de los planteamientos y propuestas incluidas en el documento ofrece dudas significativas sobre varios de los componentes y líneas estratégicas que deberían de contribuir a diseñar un modelo territorial futuro viable y realista. Por añadidura, los objetivos propuestos que ya resultaban a priori ostentosos, terminan por desvanecerse cuando se detecta la carencia de un programa económico para el desarrollo de la Estrategia, que hará irrealizables la inmensa mayoría de los pródigos proyectos urbanísticos y territoriales planteados, y por supuesto desincentivará el interés de administraciones de ámbito inferior que se verán obligadas a asumir costes y responsabilidades.

6.2. La pertinencia del decrecimiento como estrategia territorial

La segunda de las vías identificadas exige necesariamente algo más que el mero retoque cosmético, tecnológico o conservacionista; reclama además una voluntad por limitar el crecimiento descontrolado de los usos artificiales en el territorio, por disminuir la entropía de las ciudades mediante el ahorro de consumo de materiales y energía, por eliminar buena parte de los desplazamientos motorizados innecesarios, por fomentar espacios saludables y donde las personas se sientan identificadas, por favorecer la proximidad y acceso a servicios básicos, y un largo etcétera. Por este motivo, Miralles (2011) afirma que el *decrecimiento* es un término excelente para proyectar el futuro de las ciudades, por cuanto su aplicación permitiría a largo plazo restaurar el equilibrio entre las actividades humanas y los límites impuestos por la biosfera, basándose en el denominado *círculo virtuoso del decrecimiento sereno* conceptualmente ideado por Latouche (2008) (Gráfico 2).

Gráfico 2. El círculo virtuoso del decrecimiento sereno en la planificación urbana y territorial



Fuente: Elaboración propia a partir de Latouche (2008), Miralles (2011) y

El paradigma emergente del decrecimiento tiene sobre todo como objeto resaltar «la necesidad del abandono del insensato objetivo del crecimiento por el crecimiento, objetivo cuyo motor no es más que la búsqueda desenfrenada de ganancias por parte de los poseedores de capital» (Latouche, 2008: 139). El proyecto del decrecimiento reclama fundamentalmente el abandono del modelo vigente que equipara el bienestar colectivo al crecimiento y la acumulación económica y material, y en consecuencia la práctica urbana y territorial a la inversión e intervención física para fijar, acumular y reproducir espacialmente el capital.

El objetivo de un decrecimiento desde la perspectiva territorial y urbanística es repensar todos los ámbitos de la ordenación territorial desde enfoques acordes a las dinámicas económicas, sociales y ambientales con incidencia espacial. La producción de alimentos, las actividades económicas, las fuentes de energía, la movilidad, el consumo de agua, los servicios a la ciudadanía o la generación de residuos, requieren nuevos enfoques acordes a las limitaciones que imponen los propios territorios. Desde esta perspectiva, algunos estudios recientes aportan líneas de investigación y acción basadas en los principios del decrecimiento (Blázquez, 2006; Fernández, 2006; Gaja, 2008a; Desazkunea, 2011) coincidiendo habitualmente en:

(a) Diseñar un modelo territorial acorde a las posibilidades (límites) que ofrece el territorio, priorizando la autosuficiencia y reduciendo en la medida de lo posible la dependencia de recursos que deben ser importados. Los modelos territoriales propuestos no pueden aumentar su intensidad y complejidad sobre el medio físico (especialmente en las zonas ya excesivamente transformadas),

sino que deben apostar por una *reterritorialización* que, en el contexto actual, consiste en «sanear y reconstruir sistemas ambientales y territoriales devastados y contaminados por la presencia humana» (Latouche, 2008).

(b) Promover un modelo urbano estacionario o decrecentista. Por lo general, las áreas urbanas ya están sobredimensionadas, y algunas partes de las ciudades tienden a estar infrautilizadas o directamente abandonadas. Las políticas de expansión deben dejar paso a una intervención de la ciudad que persiga la reducción de los consumos, haciéndola al mismo tiempo más habitable.

(c) Perseguir un principio rector que renuncie a los crecimientos innecesarios y superficiales, y que se base en las ideas de reciclaje y reutilización para tratar de mejorar lo existente; restaurar y rehabilitar, en lugar de construir.

(d) Establecer una nueva gobernabilidad del territorio basada en la democracia ecológica, lo que supone acercar los ámbitos de toma de decisiones a los habitantes e incitar a la participación activa en los aspectos que conciernen a la gestión de los lugares. En cierto modo, esto supone desglobalizar los sistemas de gobernanza preestablecidos y relocalizar las democracias en la escala más cercana a la ciudadanía.

Tras el último *boom* inmobiliario y tras varios años de crisis generalizada en lo económico y lo ecológico, el decrecimiento de la huella ecológica y los impactos territoriales en muchos municipios y en el conjunto provincia de Alicante es ya una necesidad. Hacer decrecer mayoritariamente la presión sobre el territorio puede contribuir a calmar la deriva ambiental, y provocar nuevas dinámicas urbanas e inmobiliarias que supongan a la larga un orden urbano y territorial más razonable.

El primer paso para alcanzar un decrecimiento en lo urbano y territorial empieza por cuestionar los valores de las prácticas vigentes en estos ámbitos. Reevaluar y reconceptualizar implica una necesaria descentralización cognitiva donde se deconstruya el progreso y el progresismo, y se valore la utilidad del retorno, arrepentimiento o remordimiento en determinados aspectos (Latouche, 2008). En este sentido y tras casi tres décadas de experiencia en planificación urbana y territorial, los documentos de planeamiento en la escala local y regional convierten a los municipios en potentes *growth machines* considerando que la intervención urbanística y territorial no se entiende sin crecimiento (económico, espacial y demográfico).

De manera general, y particularmente en el caso alicantino, el ejercicio de la prospectiva en los planes municipales ha conducido por lo general a falsas expectativas de crecimiento como se observa a través de la dilatada promoción de suelos para construcción residencial que se produce en municipios prelitorales como Monforte del Cid, Almoradí y, en menor medida, en La Romana o Aigües (Cuadro 4). «Los abultados cálculos de suelo necesario para urbanización residencial no suelen tener una base fiable y sensata de las posibilidades de crecimiento municipal, y sobre todo se observa cómo la práctica urbanística no contempla las exigencias de precisión ni los componentes que se deberían emplear para establecer hipótesis acerca de la fecundidad, la mortalidad, las migraciones y la dinámica de los hogares» (Vinuesa, 1995: 164).

En este contexto, el discurso del decrecimiento supone fundamentalmente un cambio cultural, una descolonización del imaginario colectivo que asocia la ordenación urbana y territorial con las lógicas del crecimiento. Es preciso empezar, por tanto, a preparar las ciudades y los territorios para un futuro menos exigente en recursos y necesariamente menos derrochador, donde la pla-

nificación urbana asuma que el estancamiento y el decrecimiento demográfico en las ciudades y regiones es ya una realidad.

Cuadro 4. Proyecciones demográficas en figuras de planeamiento municipal

| Municipio | Datos del plan | | | Población real 2011 |
|-------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| | Año aprobación | Año horizonte | Población proyectada | |
| Monforte C. | 2008 | - | 76.680 | 7.711 |
| Dénia | 2007 | 2030 | 74.003 | 44.726 |
| Almoradí | en elaboración | 2030 | 46.211 | 19.371 |
| La Vila | 1999 | 2016 | 53.124 | 32.733 |
| Alicante | 1987 | 2000 | 349.809 | 334.329 |
| Mutxamel | en elaboración | 2022 | 32.175 | 23.522 |
| Benissa | 2004 | 2013 | 20.000 | 13.536 |
| La Romana | 2006 | 2021 | 8.561 | 2.554 |
| Aigües | en elaboración | 2026 | 6.300 | 1.118 |
| Banyeres | 1997 | - | 12.000 | 7.200 |
| Busot | en elaboración | 2022 | 4.910 | 3.314 |
| Beniarbeig | 2011 | 2030 | 2.420 | 1.883 |

Fuente: Documentos municipales de planeamiento. Elaboración propia.

El segundo paso, reestructurar y redistribuir, implica adaptar el modelo territorial y urbano a un nuevo sistema de valores que debería hacer decrecer el desorden y despilfarro de recursos al que se ha visto sometido el espacio alicantino durante las últimas décadas. «Reestructurar, relocalizar y redistribuir las distintas actividades y servicios cotidianos en el interior de la ciudad con el fin de reducir la dependencia de los vehículos mecánicos y promover la proximidad» (Miralles, 2011: texto on-line), pero también, y sobre todo articular nuevos patrones de uso y gobernabilidad del territorio que rompan con los vigentes, donde la intensificación de usos, la búsqueda de beneficios económicos inmediatos y abundantes, y la desestructuración generalizada de las ciudades y sus entornos son un hecho consumado.

Redistribuir, en el terreno de planteamientos decrecentistas, implica repensar el destino de las inversiones en la ciudad y el territorio; desacelerar el interés en el turismo constructor y depredador, y aprovecharlo en otros sectores que podrían relanzar el modelo productivo y económico del territorio.

El tercer paso supone reducir, reutilizar y reciclar la huella territorial. Las medidas anticíclicas y estratégicas trazadas desde las administraciones públicas no contemplan, por lo general, otra vía que no sea la de reanudar el ciclo inmobiliario, proponiendo explícitamente la necesidad de recuperar el modelo que condujo al éxito del territorio alicantino. Los decretos y leyes que a lo largo del último lustro han tratado de reanimar la actividad económica, y en concreto la ETCV, apuntalan el objetivo de un crecimiento económico basado en la intensificación del uso del territorio sin contemplar, por lo demás, que hacer reducir la huella ecológica y el metabolismo socioeconómico del territorio alicantino es ya una necesidad.

Desde esta perspectiva, reducir, reutilizar y reciclar en el ámbito de la planificación urbana y territorial supone plantear la insensatez de seguir fomentando determinadas prácticas innecesarias y superfluas con fuerte incidencia territorial. Esta circunstancia se hace más flagrante cuando se

realiza una lectura detenida de los paisajes alicantinos después del *boom*, al contemplar la magnitud de los espacios urbanos que se han dejado de construir tras el estallido de la burbuja inmobiliaria; o el impacto (económico y ecológico) derivado de los proyectos en infraestructuras, cuya eficacia económica e interés social está por demostrar. Las miles de viviendas que han dejado de edificarse (junto al *stock* edificatorio preexistente) o la esterilidad de enormes inversiones públicas en complejos de ocio o infraestructuras terrestres de gran capacidad ilustran esta situación.

Reducir los proyectos territoriales superfluos será un ejercicio de responsabilidad en la ordenación territorial del futuro inmediato, como también lo será el de repensar las dinámicas de muchos pueblos y ciudades en base a criterios de reutilización y reciclaje de los espacios urbanos, especialmente de aquellos que permanecen en una situación de indefinición y precocidad tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Los nuevos paisajes urbanos posteriores al *boom* ilustran la crisis del modelo económico, pero también del inmobiliario y residencial, así como una preocupante carencia de cultura y perspectiva urbanística y territorial de todos los agentes (cajas y bancos, constructoras, ayuntamientos, etc.) implicados en la euforia urbanizadora.

Desde actitudes mucho más reflexivas que las derivadas de una economía de mercado, la posibilidad de una moratoria urbanística y la paralización de cualquier nuevo desarrollo urbano (más allá del bloqueo generado por la propia crisis) debería ser una exigencia de la práctica urbanística y territorial. Cualquier planificación en la escala municipal y supramunicipal debería empezar por reconocer la existencia de un abundante *stock* edificatorio y suelo vacante, repartido en decenas de paquetes de suelo urbanizable por toda la provincia que demuestran que la crisis del ladrillo no es una cuestión puntual ni temporal.

La cuestión es ahora, parafraseando a Gaja (2011), qué hacer con esos miles de hectáreas vacías, perfectamente urbanizadas, llave en mano, que se extienden a lo largo del territorio alicantino, gran parte de las mismas destinadas a usos turísticos, lejos de las principales áreas urbanas, sin apenas equipamientos, mal conectadas y sin actividades ni recursos económicos que permitan una vida urbana viable y plena.

La dimensión de estas superficies es tal que prácticamente resulta inviable pensar en su restauración. El conjunto de superficies en vías de urbanización afectadas por la crisis tiene capacidad para acoger una nueva superficie urbana equiparable a la suma de dos ciudades como Alicante y Elche. Deconstruir o desurbanizar todas estas superficies con carácter general supondría una nueva factura económica y ecológica muy difícil de asumir. Pero salvar de la urbanización ciertos ámbitos especialmente delicados como el litoral o el entorno de espacios protegidos, podría suponer un coste económico que, no obstante, tendría notables consecuencias ambientales para estos entornos.

Finalmente, el cuarto paso supone relocalizar el uso y la gobernabilidad del territorio. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, las prácticas territoriales institucionales parecen tener como denominador común la búsqueda de medidas capaces de reanudar el ciclo económico y de reiniciar, porqué no, una nueva etapa de expansión urbanizadora que reactive los solventes flujos monetarios del pasado más reciente.

El parón urbanizador e inmobiliario es paralelo a la aquiescencia de las instituciones y a la proliferación de soluciones anticíclicas y urgentes que supondrán un mayor derroche y desorden de recursos económicos, humanos, ecológicos, etc. Pero el *boom* inmobiliario y la posterior crisis tendrán consecuencias que serán intensas en el espacio y duraderas en el tiempo, con unas se-

cuelas que, en la escala local, son fácilmente visibles. Así por ejemplo, lo sucedido con las cajas de ahorros locales es revelador. «Tan emblemáticas e importantes dentro de las economías de proximidad, a partir de ahora se convertirán mayoritariamente en bancos que podrán invertir sus beneficios sin tener que atender al interés social, local y regional» (Rullan, 2012: 166). «Lo que está sucediendo con los ayuntamientos también es significativo. El endeudamiento acumulado se suma a la restricción en las inversiones que han dejado de llegar por la vía inmobiliaria. Los generosos ingresos por la actividad urbanística fueron una solución presupuestaria a corto plazo, pensando que sería un elemento ventajoso y perpetuo. Pero con el cambio de ciclo, las administraciones locales «tienen que atender gastos crecientes ocasionados por un modelo de urbanización dispersa que incrementa extraordinariamente el coste de la provisión de determinados servicios» (Romero, 2011: 32).

La crisis ha provocado una retirada relativa de la tutela que anteriormente podían ejercer los ayuntamientos o las instituciones financieras locales: en lo urbanístico, la mayoría de pueblos y ciudades se hallan en una fase estacionaria y una inactividad que perdurará probablemente durante varios años; en lo cotidiano, en lo referido a la gestión de los servicios a las personas que deben ser administrados desde lo local, se asiste a una suerte de desmantelamiento programado que poco a poco va afectando a los servicios de salud, educación, asistencia social, cultura, medio ambiente, etc. Al flaquear los ingresos procedentes de unas prácticas territoriales y urbanísticas sobredimensionadas, se está procediendo al desarme de todo aquello que tiene su razón de ser en la escala cotidiana, con unas consecuencias que están resultando devastadoras en muchos municipios incapaces de enfrentar la nueva situación.

Con todo, el retroceso de las instancias locales está coincidiendo con el refuerzo y reflorecimiento de iniciativas de base, proyectos ciudadanos contestatarios, solidarios y pragmáticos dentro de la adversidad del contexto espacio-temporal vigente. Prácticas alternativas, económicas, sociales y ambientales que, alejadas de la filosofía y objetivos mercantilistas, encuentran su clave interpretativa en el ecologismo, la defensa del territorio, la soberanía alimentaria o la economía solidaria, a través de proyectos como la implantación de monedas sociales, los grupos de consumo locales o los bancos de intercambio de conocimientos. Estas iniciativas, a la vez diversas y complementarias, podrían formar en conjunto una estrategia eficaz para poner en práctica los procesos de relocalización bajo el prisma del decrecimiento, siempre y cuando sean capaces de madurar y consolidarse como verdaderas prácticas territoriales alternativas.

Las prácticas territoriales alternativas deben entenderse proyectos y procesos que, retraídos de la esfera de los poderes públicos, surgen como respuesta a las crisis económica y ecológica actuales, demostrando una actitud de rechazo al modelo económico y político vigente, y proponiendo un modelo alternativo a partir de la reflexión teórica y el activismo social. Son prácticas que tienen sus bases en dos procesos indispensables y necesarios. En primer lugar, la recuperación de la autonomía local, favoreciendo la reterritorialización de los principales elementos que aseguran una vida cotidiana plena y satisfactoria, como son la producción y circulación de bienes y servicios locales, la capacidad de autoproducción de recursos básicos como puede ser la energía, o la proximidad e intensidad en las relaciones sociales a través de la cultura y el tiempo de ocio. En segundo lugar, la relocalización de la política, al inventar o reinventar, por ejemplo, una «democracia de proximidad» o «democracia ecológica» (Latouche, 2008: 191), que permita una gestión responsable de lo cotidiano.

Un reciente estudio (Conill *et al.*, 2012) aborda el concepto de *prácticas económicas alternativas* como la construcción de una economía sostenible, solidaria y descentralizada que aporta significados innovadores sobre el trabajo, nuevos sistemas de valores que superan el mercantilismo, que sitúa la creatividad en el centro de la actividad humana y que denuncia las nefastas consecuencias del capitalismo y de su crisis. Aplicado al uso y gestión del territorio, las denominadas *prácticas alternativas* son aquellas que además tienen un significado inequívocamente geográfico, que asume las correspondencias entre las prácticas que inician algunos grupos sociales y el medio en que se desarrollan, que aluden por tanto a lo local o más propiamente al terreno.

Gráfico 3. Universo de las prácticas territoriales alternativas



Fuente: Elaboración propia.

La caracterización que sigue (así como su esquematización en el Gráfico 3), pretende enumerar algunas de las prácticas territoriales alternativas que están teniendo una impronta más destacada en la provincia de Alicante:

(a) **Actividades económicas:** Son iniciativas para favorecer la relocalización de actividades productivas y las economías de proximidad, a través de empresas que producen y abastecen localmente por un lado, así como de bancos y fondos de préstamo comunitario que posibilitan a sus habitantes realizar inversiones que repercutan positivamente en la comunidad por el otro. Las prácticas alternativas en actividades productivas han venido sobre todo desde el ámbito de la producción-distribución agroecológica y, en menor medida, del impulso de modelos económicos alternativos. Dentro de estas iniciativas destacan los grupos de consumo local como Mercatrémol (Alicante), Cistellaecològica (Elche), L'Alficsòs (El Vinalopó) y Moviments (La Marina Alta), que se suman a varias de las cooperativas o pequeñas empresas de producción que también aparecen

en los últimos años en varios puntos de la provincia. Otro tipo de proyectos se relacionan con la reapropiación de los flujos monetarios a través de monedas locales y sociales. En este sentido, se están constituyendo algunos proyectos como los bancos del tiempo (en Altea, Alicante, Sant Vicent, Elche, etc.) o monedas sociales (Novelda) cuyo objetivo es articular sistemas de intercambio local a través de la recuperación de prácticas como el trueque o la puesta en marcha de monedas propias como forma de asegurar que los flujos de dinero se queden en la escala local y repercutan a sus empresas y sus miembros. En los municipios de El Comtat están surgiendo con relativa lucidez iniciativas empresariales basadas en la denominada economía del bien común, definida como un modelo que mide el éxito empresarial a través del producto del bien común, un indicador de la huella ecológica, la democracia y la responsabilidad financiera en el interior de las propias empresas. Un ejemplo lo constituye la iniciativa Microviña, un proyecto para la recuperación de parcelas agrarias de minifundio en estado de abandono que además facilita la incorporación de jóvenes y desempleados a la actividad agrícola.

(b) Urbanismo y vivienda: Se trata de prácticas importantes desde el plano constructivo y desde la perspectiva social, que propugnan el abandono de la vía constructiva y recuperan conceptos como los de propiedad comunitaria, cooperativa, cesión de uso o covivienda como medidas para asegurar el derecho a viviendas dignas. En el plano urbano, cada vez son más visibles los proyectos que defienden el freno a los nuevos crecimientos o la degradación provocada por la urbanización, a través de proyectos comunitarios y/o populares por recuperar espacios para la agricultura de proximidad o el arte urbano. Algunos ejemplos los constituyen los huertos urbanos en el barrio de Las Carolinas (Alicante), el huerto ecológico de La Cuerna de Altabix en Elche, o de otros huertos populares en municipios como Novelda, Petrer, Alcoi, Altea, Villena, etc.

(c) Medio rural: Las prácticas en zonas rurales tienen por objeto hacer visible los problemas del medio rural, como puedan ser el declive demográfico, la pérdida de actividades económicas o la degradación de espacios agroforestales, que se produce fundamentalmente por la pérdida de cultivos tradicionales y las prácticas culturales asociadas. En algunos enclaves rurales de la provincia están apareciendo colectivos y proyectos comunitarios para la defensa del espacio rural, la reactivación económica a través de la agroecología, o para el sencillo propósito de conservar los paisajes agrarios y forestales con cierta actividad. Son significativos los proyectos de custodia del territorio como el de Mas de Llopis (Cocentaina) o los que está desarrollando el colectivo AHSA en los humedales del sur provincial, aunque es posible identificar hasta una veintena de acuerdos en diferentes localizaciones de la provincia. Estas propuestas sugieren nuevas estrategias de conservación de los recursos y valores naturales, culturales y paisajísticos de determinados espacios, implicando a los propietarios rurales con entidades voluntarias que realizan una conservación activa del territorio.

(d) Energía y recursos: Las alternativas de autoproducción de energías renovables están cada vez más extendidas a nivel individual, aunque muy poco desarrolladas a nivel colectivo. Favorecer la producción de energías propias y renovables para garantizar consumos cotidianos y evitar la dependencia de las fuentes convencionales, es posible y deseable con los medios disponibles y en los contextos locales.

(e) Movilidad y transporte: Algunos colectivos llevan años reclamando mayores esfuerzos para reducir la movilidad motorizada en las ciudades y generando el debate en torno a las grandes transformaciones provocadas por el tren de alta velocidad y otras infraestructuras de gran capacidad, apostando por otra cultura de la movilidad. Así por ejemplo, la Plataforma Comarcal por

la Movilidad Sostenible de l'Alacantí ha realizado importantes campañas para sensibilizar a la ciudadanía sobre la problemática del tráfico motorizado y la urgencia de medios de transporte alternativos al vehículo privado. Un ejemplo similar es la denominada BiciCrítica Elda-Petrer, una iniciativa en esencia simbólica que demanda un mayor uso de la bicicleta en los desplazamientos urbanos. Son proyectos fuera del ámbito institucional que convergen con la apuesta de algunos municipios por la promoción de los carriles-bici y la recuperación de vías peatonales.

(f) Servicios a la ciudadanía: Este tipo de iniciativas cuentan ya con una trayectoria más o menos consolidada que, en plena crisis de los servicios públicos y cotidianos, están ganando visibilidad y representatividad. Los comedores comunales, bancos de alimentos, sistemas de intercambio de servicios, voluntariados sociales y otros servicios informales están adoptando el papel que, con otra lógica, deberían asumir las instituciones públicas.

(g) Espacios naturales: Los voluntariados ambientales cuentan también con cierta trayectoria, reconocimiento, y disponen cada vez de más medios (económicos, pero especialmente humanos) para tratar de desarrollar iniciativas por la defensa y protección de los espacios naturales. Relacionadas con las asociaciones de tipo medioambiental (según datos del registro provincial de asociaciones son más de 600 los colectivos con carácter medioambiental en 2013), las prácticas sobre espacios naturales presentan una extraordinaria evolución cuantitativa y cualitativa en los últimos años, generando además una intensa red de colectivos y voluntariados ambientales que convergen, en algunos casos, en ambiciosas iniciativas como los Encuentros del Vinalopó. Este colectivo de colectivos, está realizando tareas de investigación y difusión sobre los problemas del río Vinalopó, actuando como grupo de presión ante ayuntamientos y organismos supralocales, y desarrollando campañas para la recuperación biológica del río. Pero lo más importante es que esta iniciativa está generando una identificación social hacia el Vinalopó, no sólo como referente natural, sino como acicate para el establecimiento de medidas de protección ambiental concreta que aglutinen a todos los municipios por los que discurre el río.

(h) Actividades de ocio: Dentro de las prácticas que se inspiran en el decrecimiento, el ocio se asocia, entre otros, a los tiempos de los que se dispone para el pensamiento, la democracia, los encuentros y las relaciones. En esta línea, durante los últimos años han ido surgiendo multitud de colectivos contraculturales, antimilitaristas, ateneos o centros de investigación y formación más o menos independientes (como los centros de estudios locales), que orientan el empleo del tiempo de ocio a la realización de actividades que proyectan la cultura, el conocimiento e incluso las sabidurías locales.

Se trata, es cierto, de iniciativas locales dispersas, diversas y autónomas, que se movilizan y actúan localmente, pero que también encuentran su clave interpretativa en la articulación de redes transversales: desde lo micro a lo macro, pasando por lo meso. Resulta necesario, por tanto, dar un giro en la orientación de los territorios, que tendría que producirse desde la escena global hacia la local, y viceversa. En primer lugar, son pertinentes cambios profundos en el enfoque de las políticas territoriales, cuya finalidad sigue siendo articular dinámicas económicas no siempre acordes y respetuosas con los territorios. Pero seguramente, y en segundo lugar, la clave sea el reconocimiento de los «incipientes procesos moleculares, de pequeña escala, desde abajo, que aparecen contra la lógica dominante» (Fernández, 2006: 81), muchas de las prácticas territoriales alternativas que, una reducida parte de la población, está activando y que tratan de ir en esta dirección.

Tal vez sea excesivo ver en la postura del decrecimiento y de las prácticas territoriales alternativas la solución a todos los problemas de las crisis actuales que afectan a los municipios alicantinos, o

de creer que éstas sean la vía indispensable para reconstruir la aparente estabilidad que se ha perdido con el *boom* inmobiliario y su posterior estallido. Pero muchas de estas iniciativas prácticas ya se están demostrando posibles, viables y capaces de articular grandes cambios en pequeñas escalas. La cuestión, por tanto, debería ser al menos objeto de reflexión desde instancias que siguen viendo el territorio como un recurso productivo que se debe racionalizar y poner en valor, a partir de supuestas ordenaciones y estrategias que (parece demostrado) acentúan trayectorias indeseables y son causa de nuevos problemas territoriales.

7. Conclusiones

La crisis económica actual, consecuencia del *crash* del modelo capitalista global, así como de su dimensión especulativo-financiera, converge con una crisis ecológica de alcance universal, derivada del desequilibrio en las relaciones entre el metabolismo adquirido por las sociedades industriales en su conjunto y la capacidad de carga de la biosfera. Ambas crisis se combinan explosivamente en la escala global a principios de siglo XXI. Sin embargo, las consecuencias, los impactos y las incertidumbres se manifiestan fundamentalmente en la escala local.

Parece demostrado que, tanto crisis económica como crisis ecológica tienen un origen localizado, derivadas de una gestión impropia del aparato productivo-financiero o de los excesos de las actividades humanas sobre el medio ambiente. Crisis que trascienden entre lo local y lo global, dando lugar a un colapso económico generalizado y a una aceleración de los problemas ecológicos que se manifiestan en forma de impactos diversos, ya sea a través de la saturación de los mercados inmobiliarios o hipotecarios, el brusco aumento del desempleo, el desorden y despilfarro de los recursos naturales del territorio, o el acoso a los paisajes locales, por poner algunos ejemplos.

La crisis particular que sufre el Estado español desde 2006-2008 ilustra el éxito efímero y las brutales consecuencias de un modelo económico y territorial que sólo ha contemplado el objetivo de crecimiento por el crecimiento. El *tsunami urbanizador* que catalizó la gran reestructuración económico-productiva y urbano-territorial de las ciudades y regiones españolas durante el periodo 1997-2006, deja unas consecuencias y un balance dramático en lo económico, lo social y lo ambiental. Esta situación muestra su rostro más preocupante en zonas como Madrid y el litoral mediterráneo. Entre éstas, la provincia de Alicante se sitúa como uno de los puntos calientes del éxito y caída libre del modelo urbano-económico español; una zona que por sus trayectorias heredadas y sus condiciones territoriales inició con un dinamismo eufórico su particular burbuja basada en la masiva producción residencial y la mercantilización turística del territorio. Este *boom* inmobiliario y urbanizador empieza a decaer en 2007, dando lugar a una nueva fase que, en lo territorial, se caracteriza por las incertidumbres y la provisionalidad en la gestión del urbanismo y del territorio.

A nivel local y en conjuntos supramunicipales, el resultado podría ser el de una nueva geografía urbana en estado estacionario, latente, que ha dibujado amplios conjuntos territoriales desestructurados en todas sus vertientes: la económica al generar una fuerte carga presupuestaria sobre las haciendas municipales que tienen que obedecer a su mantenimiento; social al dar lugar a nuevos fenómenos de vecindarios y barriadas deshabitadas (o lo que es peor, episodios cada vez más frecuentes de ejecuciones hipotecarias y desahucios); y, por supuesto, la ambiental al aniquilar el suelo y paisaje anterior para dar cabida a nuevos conjuntos urbanos imprecisos, indefinidos e impropios de sistemas urbanos complejos y funcionales.

Con estas condiciones, en los últimos años parece identificarse el inicio de un cambio cultural con respecto al territorio en el ámbito institucional, con la difusión de determinadas prácticas territoriales que abogan por una mayor integración de los problemas sociales y ambientales en la gestión de las ciudades o una mayor implicación ciudadana. En esta dirección, la ETCV se define como un instrumento de ordenación territorial que catalizará la salida de la crisis económica y el fortalecimiento de los municipios y áreas funcionales de la provincia de Alicante. Sin embargo, un análisis de este instrumento no presenta alternativas posibles más allá de los modelos territoriales y económicos que desencadenaron las crisis actuales y, por lo demás, carece de un programa administrativo y económico para su desarrollo, lo que conducirá previsiblemente a su postergación y olvido, social y político, en la línea de lo ocurrido con anteriores procesos de planificación.

En este escenario y en este contexto, parece preciso señalar la necesidad de buscar alternativas más o menos realistas, posibles y fundadas sobre principios y objetivos que se adapten a la nueva situación territorial. Parecen necesarios cambios profundos que impliquen las políticas públicas y el conjunto de los actores que intervienen en los territorios. Las situaciones y tendencias descritas reclaman una ineludible revisión, y si es conveniente (y así lo parece) la reformulación de los principios y estilos de uso y gestión del territorio realmente existentes. Desde los terrenos de la teoría y de la práctica son vitales nuevos enfoques que superen los paradigmas que han conducido a la recesión económica y al previsible colapso ecológico, de modo que iniciar el decrecimiento en muchos de los ámbitos que constituyen los pilares esenciales de las sociedades en sobre-crecimiento es, según la postura aquí defendida, una cuestión urgente y decisiva si lo que se pretende es fortalecer las capacidades de los territorios para enfrentar las diversas crisis.

8. Referencias bibliográficas

- Aalbers, Manuel (2009). «Geographies of the financial crisis». *Area*, 41 (1), 34-42.
- Assadourian, Erik (2012). «The Path to Degrowth in Overdeveloped Countries». En: World Watch Institute. *State of the World 2012*. Washington, D.C.: Autor, 22-37.
- Bilancini, Ennio y D'Alessandro, Simone (2012). «Long-run welfare under externalities in consumption, leisure, and production: A case for happy degrowth vs. unhappy growth». *Ecological Economics*, 84, 194-205.
- Blanco, Ismael y Subirats, Joan. (2012). «Políticas urbanas en España: dinámicas de transformación y retos ante la crisis». *Geopolítica(s)*, 3, 1, 15-33.
- Blázquez, Macià (2006). «Calmar, contenir i decreixer. Polítiques provades (1983-2003) i possibles de planificació urbanística». *Territoris*, 6, 161-174.
- Bocco, Gerardo y Urquijo, Pedro (2010). «La geografía ambiental como ciencia social». En: Lindón, Alicia y Hieraux, Daniel (Dirs.). *Los giros de la Geografía Humana*. Barcelona: Anthropos, 259-270.
- Burriel, Eugenio (2009a). «La Unión Europea y el urbanismo valenciano. ¿Conflicto jurídico o político?». *Boletín de la AGE*, 49, 5-23.
- Burriel, Eugenio (2009b). «La planificación territorial en la Comunidad Valenciana (1986-2009)». *Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, XIII (306).
- Casellas, Antònia (2010). «La geografía crítica y el discurso de la sostenibilidad. Perspectivas y acciones». *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 56 (3), 573-581.
- Cheynet, Vincent (2006). «Preámbulo: Decrecimiento económico, crecimiento humanista». En: Colectivo Revista Silence. *Objetivo Decrecimiento*. Barcelona: Leqtor, 9-10.
- Clémentin, Bruno y Cheynet, Vincent (2006). «Introducción: El decrecimiento sostenible. Hacia una economía saludable». En: Colectivo Revista Silence. *Objetivo Decrecimiento*. Barcelona: Leqtor, 11-22.
- Conill, Joana; Cárdenas, Amalia; Castells, Manuel; Hlebik, Svetlana y Servon, Lisa (2012). *Otra vida es posible. Prácticas económicas alternativas durante la crisis*. Barcelona: UOC.

- Desazkundea (2011). *Repensando la ordenación del territorio desde el decrecimiento*. Bilbao: Colectivo Desazkundea.
- Díaz, Fernando y Lourés, María Luisa (2008). «La globalización de los mercados inmobiliarios: su impacto en la Costa Blanca». *Ciudad y Territorio, Estudios territoriales*, XL, 155, 77-92.
- Fernández, Ramón (2006). *El tsunami urbanizador español y mundial*. Barcelona: Virus editorial.
- French, Shaun; Leyshon, Andrew y Thrift, Nigel (2009). «A Very Geographical Crisis. The Making and Breaking of the Subprime Crisis». *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 2 (2), 287-302.
- Fundació Terra (2009). *Perspectiva Ambiental 44. Acrecimiento*. Barcelona: Autor.
- Gaja, Fernando (2001). «La producción de suelo urbanizado como objetivo de la actuación urbanística». *Urban*, 5, 83-101.
- Gaja, Fernando (2008a). «Urbanismo ecológico, ¿sueño o pesadilla?». *Revista Internacional de Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo*, 3, 105-126.
- Gaja, Fernando (2008b). «El tsunami urbanizador en el litoral mediterráneo. El ciclo de hiperproducción inmobiliaria 1996-2006». *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales* vol. XII, 270 (66).
- Gaja, Fernando (2011). «Antes, durante y después del tsunami inmobiliario en el País Valenciano». Trabajo presentado en el seminario *Contra la depredación de los bienes comunes*. *Ciudad, territorio, capitalismo*, Madrid, 10-12 de diciembre de 2011.
- Gaja, Fernando (2012). *Urbanismo estacionario*. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
- García, Javier (2004). «Y, cuando se acabe el municipio... ¿qué hacer?». *Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales*, XXXVI, 139, 5-13.
- García, Julio (2010). *El decrecimiento feliz y el desarrollo humano*. Madrid: Los Libros de la Catarata.
- Gozávez, Vicente (1985). «La rurbanización del litoral survalenciano». En: Clemente, E. (Ed.), *Jornadas de Geografía y Urbanismo*. Salamanca: COPOT Castilla y León, 181-190.
- Gozávez, Vicente *et al.* (2005). Les territoires du tourisme littoral et les pouvoirs locaux dans la province d'Alicante (Espagne). *Rives méditerranéennes*, <rives.revues.org/1893>.
- Guaran, Andrea (2012). «Degrowth and geographical education». Trabajo presentado en la *3rd International Conference on Degrowth for Ecological Sustainability and Social Equity*, Venecia, 19-23 de septiembre de 2012.
- Jiménez, Luis M. (Dir.) (2010). *Sostenibilidad en España 2010*. Alcalá de Henares: Observatorio de la Sostenibilidad en España.
- Latouche, Serge (2008). *La apuesta por el decrecimiento. ¿Cómo salir del imaginario dominante?* Barcelona: Icaria.
- Latouche, Serge (2009). *Pequeño tratado del decrecimiento sereno*. Barcelona: Icaria.
- Larrosa, José Antonio (2012). *El Área urbana-metropolitana de Alicante-Elche. Delimitación y caracterización. Aplicación de los criterios funcionales de movilidad*. Tesis doctoral. Alicante: Universidad de Alicante.
- Martin, Ron (2010). «The local geographies of the financial crisis: from the housing bubble to economic recession and beyond». *Journal of Economic Geography*, 11, 4, 587-618.
- Martínez, Antonio. (2010). *El desarrollo local en un contexto globalizado. Cohesión territorial, gobernanza, políticas públicas e instrumentos de innovación. Estudio de casos en el Corredor Industrial del Vinalopó (Alicante)*. Tesis doctoral. Alicante: Universidad de Alicante.
- Martínez, Joan (2009). «Hacia un decrecimiento en las economías ricas». *Revista de Economía Crítica*, 8, 121-137.
- Martínez, Joan; Pascual, Unai; Vivien, Franck-Dominique y Zaccai, Edwin (2010). «Sustainable de-growth: Mapping the context, criticisms and future prospects of an emergent paradigm». *Ecological Economics*, 69, 1.741-1.747
- Mata, Rafael (2007). *Auge inmobiliario y evolución de los usos de suelo en España. Por una nueva cultura del territorio*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
- Méndez, R. (2012). «Ciudades y metáforas: sobre el concepto de resiliencia urbana». *Ciudad y territorio: Estudios territoriales*, XLIV (172), 215-231.
- Ministerio de Fomento (2011). *Sectores residenciales en España 2011*. Madrid: Autor.
- Ministerio de Fomento (2013). *Informe sobre el stock de vivienda nueva 2012*. Madrid: Autor.
- Miralles, Carme (2011). «Decrecimiento y ciudad». *Público*, 9 de agosto de 2011.
- Murray, Iván y Blázquez, Macià (2009). «El dinero, la aguja del tejido de la globalización capitalista». *Boletín de la AGE*, 50, 43-80.

- Murray, Iván; Blázquez, Macià y Rullan, Onofre (2005). «Los cambios en la cobertura de la Tierra. Una revisión bibliográfica desde la Geografía». *Biblio 3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*, 571.
- Oliver, Josep (2011). *Informe sobre el sector inmobiliario residencial en España 2011*. Barcelona: Servicio de Estudios de CatalunyaCaixa.
- Oliver, Josep (2012). *Informe sobre el sector inmobiliario residencial en España 2012*. Barcelona: Servicio de Estudios de CatalunyaCaixa.
- Reyes, Eugenio (2010). «Tres discursos sobre el decrecimiento en las ciudades». En: Taibo, Carlos (Dir.). *Decrecimientos: sobre lo que hay que cambiar en la vida cotidiana*. Madrid: Los Libros de la Catarata, 51-65.
- Ridoux, Nicolas (2009). *Menos es más. Introducción a la filosofía del decrecimiento*. Barcelona: Los libros del Lince.
- Romero, Joan (2009). *Geopolítica y gobierno del territorio en España*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Romero, Joan (2011). «Construcción residencial y gobierno del territorio en España. De la burbuja especulativa a la recesión. Causas y consecuencias». *Cuadernos Geográficos*, 47, 17-46.
- Rullan, Onofre (2012). «Urbanismo expansivo en el Estado español: De la utopía a la realidad». En: Gozávez, Vicente y Marco, Juan Antonio (Eds.). *Geografía, retos ambientales y territoriales*. Madrid: Asociación de Geógrafos Españoles, 165-212.
- Salom, Julia (2011). «Procesos territoriales y transformaciones recientes del sistema urbano valenciano». *Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, XV (356).
- Salom, Julia y Albertos, Juan Manuel (2006). Redes institucionales y servicios a las empresas en el cluster cerámico de Castellón. *Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, X (213).
- Schneider, François (2010). «Introduction to Degrowth». Trabajo presentado en la 2ª Conferencia Internacional sobre Decrecimiento, Sostenibilidad Ecológica y Equidad Social, Barcelona, 25-28 de marzo de 2010.
- Taibo, Carlos (2009). *En defensa del decrecimiento. Sobre capitalismo, crisis y barbarie*. Madrid: Los Libros de la Catarata.
- Unwin, Tim (1995). *El lugar de la geografía*. Madrid: Cátedra.
- Vera, Fernando. (1987). *Turismo y urbanización en el litoral alicantino*. Tesis doctoral. Alicante: Universidad de Alicante.
- Vinuesa, J. (1995). «Análisis geodemográfico y planeamiento urbanístico». *Estudios Geográficos*, 218, 147-168.
- Vinuesa, J. (2008). La vivienda vacía en España: un despilfarro social y territorial insostenible. *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, XII, 270 (39).
- Wójcik, Dariusz (2009). «Geography, stupid! An note on the credit crunch». *Environmental and Planning A*, 41, 258-260.
- Zornoza, Carmen (2014). «El SIOSE como fuente para la cuantificación del suelo urbanizado sin edificar: propuesta metodológica aplicada a la Comunidad Valenciana». *Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales*, XLVI, 180, 317-331.

Sobre el autor

XAVIER AMAT MONTESINOS

Doctor en Geografía y Máster en desarrollo local e innovación territorial. Profesor asociado en el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante.